



UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS



TESIS

**“La terminación consensuada del proceso penal común y su
incorporación en la etapa intermedia o previa al juicio oral”**

Autor:

Bach. Bernal Zevallos, Frank Marcos

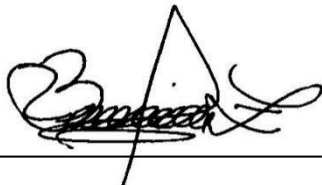
Asesor:

Mg. Colina Moreno, Mary Isabel

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

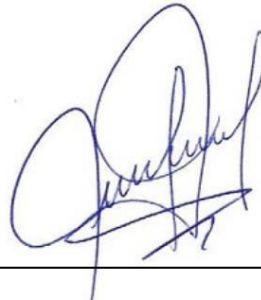
Lambayeque, febrero de 2022

Tesis denominada: “**La terminación consensuada del proceso penal común y su incorporación en la etapa intermedia o previa al juicio oral**”,
presentada para optar el **título profesional de abogado** por: **BERNAL ZEVALLOS, Frank Marcos.**



Bach. Bernal Zevallos, Frank Marcos

AUTOR



Mg. Colina Moreno, Mary Isabel

ASESOR

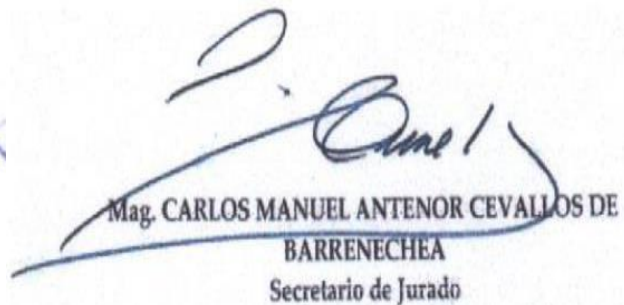
APROBADO POR:



Abog. CARLOS MANUEL MARTINEZ

OBLITAS

Presidente del Jurado



Mag. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE

BARRENECHEA

Secretario de Jurado



Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ

Vocal del Jurado.

DEDICATORIA

El presente trabajo de investigación se lo dedico a mi madre y mi hermana, por su paciencia y apoyo incondicional en cada momento de mi vida.

A Flavia Luciana, por ser mi motivo y mi fuerza para seguir adelante. Te amo infinitamente.

A mi abuela materna, por sus consejos constantes.

A mi papá Enrique, a quien estoy seguro, le hubiera gustado seguir disfrutando mis logros. Te extraño.

A Daryn 29, por su amor y su valioso esfuerzo por hacerme entender día a día, que nunca será tarde para alcanzar nuestros sueños.

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por ser mi guía y darme fortaleza en los momentos difíciles.

A mi familia por haber confiado en mí.

Gracias mamá, todo lo que soy te lo debo a ti.

A mi asesora, por sus orientaciones.

ÍNDICE

DEDICATORIA	3
AGRADECIMIENTO	4
ÍNDICE	5
RESUMEN	8
ABSTRACT	10
INTRODUCCIÓN	12
ASPECTOS METODOLÓGICOS	14
1. REALIDAD PROBLEMÁTICA	14
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	14
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	16
2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO	16
3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	18
3.1. OBJETIVO GENERAL	18
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	18
4. HIPÓTESIS	19
5. VARIABLES	19
6. MARCO TEÓRICO	19
6.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA	19
6.1. BASE TEÓRICA	21
7. TIPO DE INVESTIGACIÓN	25
8. MÉTODOS Y TÉCNICAS	26
8.1. MÉTODOS	26
8.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN	27
CAPÍTULO I	29
TERMINACIÓN ANTICIPADA Y PROCESO PENAL: LA INCORPORACIÓN DE UN MECANISMO CONSENSUAL DE SIMPLIFICACIÓN PROCESAL	29
1. REFORMA DEL PROCESO PENAL: UNA RESPUESTA DEL ESTADO A LA CRISIS DE LENTITUD Y SOBRECARGA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	29
1.1. EVOLUCIÓN, REFORMA Y EXPECTATIVAS DEL PROCESO PENAL PERUANO: INTENTOS HACIA UNA SOLUCIÓN RÁPIDA Y OPORTUNA DEL CONFLICTO PENAL	29
1.2. ENFOQUES DEL PROCESO PENAL REFORMADO	33
1.2.1. ENFOQUE CONSTITUCIONAL: VISIÓN GARANTISTA DEL PROCESO PENAL COMÚN REFORMADO	33
1.2.2 ENFOQUE DE CELERIDAD: VISIÓN SIMPLIFICADORA Y ECONÓMICA DEL PROCESO PENAL COMÚN REFORMADO	35
1.3. SALIDAS ALTERNATIVAS AL PROCESO PENAL: UNA NECESIDAD POLÍTICO CRIMINAL DE SOLUCIÓN RÁPIDA Y EFECTIVA	39
1.4. TIPOLOGÍA DE MECANISMOS ALTERNATIVOS: LA SIMPLIFICACIÓN PROCESAL COMO EJE ORIENTADOR DE SU APLICACIÓN	42
2. TERMINACIÓN ANTICIPADA CONSENSUAL: MANIFESTACIÓN DE UNA POLÍTICA CRIMINAL DE SIMPLIFICACIÓN PROCESAL	48

2.1. EL PROCESO PENAL COMÚN Y LOS PROCESOS ESPECIALES ¿O SIMPLIFICADOS?.....	48
2.2. APRECIACIONES CONCEPTUALES RESPECTO DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO PENAL.....	50
2.2.1. PARA EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:.....	50
2.2.2. PARA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	51
2.2.3. PARA LA DOCTRINA NACIONAL:	52
2.2.4. PARA LAS INSTITUCIONES DE LA REFORMA	53
2.3. FUNDAMENTO POLITICO CRIMINAL	55
2.4. OPORTUNIDAD PROCESAL: MOMENTO Y LÍMITE TEMPORAL DE SU CELEBRACIÓN.....	57
2.4.1. PREVISIÓN NORMATIVA	57
2.4.2. MOMENTO DE CELEBRACIÓN	57
2.4.3. LIMITE TEMPORAL EN LA PRÁCTICA JUDICIAL: DE LA POSIBILIDAD DE APLICARLO INCLUSIVE EN LA ETAPA INTERMEDIA.....	58
CAPÍTULO II.....	64
TERMINACIÓN ANTICIPADA EN ETAPA INTERMEDIA O PREVIA AL JUICIO ORAL: A PROPÓSITO DEL ACUERDO PLENARIO 5-2009.....	64
1. ACUERDOS PLENARIOS: ALCANCES CONCEPTUALES Y SU INVOCACIÓN EN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL.	64
1.1. CONSIDERACIONES SOBRE SU NATURALEZA JURÍDICA	64
1.2. DE CRITERIO ORIENTADOR A CRITERIO VINCULANTE.....	65
1.3. FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y LA DESVINCULACIÓN DEL ACUERDO PLENARIO 5-2009	66
2. TERMINACIÓN ANTICIPADA: A PROPÓSITO DE SU APLICACIÓN EN ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL.....	68
2.1. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO PENAL COMÚN EN ETAPA INTERMEDIA: POSICIÓN DISCREPANTE SOBRE LA DESNATURALIZACIÓN DE SU REGULACIÓN NORMATIVA Y SU NATURALEZA JURÍDICA ASUMIDA POR EL AP 5-2009.....	70
2.2. LA TERMINACIÓN ANTICIPADA Y SU ORIENTACIÓN POLÍTICO CRIMINAL EN EL PROCESO PENAL: OPINIÓN DISCREPANTE RESPECTO DE SU TERGIVERSACIÓN COMO MECANISMO DE SIMPLIFICACIÓN PROCESAL APLICABLE EN LA AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN ASUMIDA POR EL AP 5-2009.....	77
2.2.1. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO PENAL COMÚN: MECANISMO SIMPLIFICADOR DEL PROCESO Y ECONÓMICO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	77
2.2.2. FASES DE LA ETAPA INTERMEDIA: FASE ESCRITA Y FASE ORAL [AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL DE ACUSACIÓN].....	78
2.2. EL AGRAVIADO Y SU PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	83
2.3.1. EL AGRAVIADO Y EL PERJUDICADO EN EL PROCESO PENAL.	83
2.3.2. LA REPARACIÓN CIVIL COMO DERECHO DE ACCIÓN CIVIL	

DENTRO DEL PROCESO PENAL.....	84
2.3.3. EL DERECHO DE DEFENSA DE LA ACCIÓN CIVIL EN LA AUDIENCIA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA CELEBRADA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL COMÚN.....	88
2.3.3.1. LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL ACTOR CIVIL EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL.....	88
2.3.3.2. EL DERECHO DE DEFENSA DEL ACTOR CIVIL EN EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.....	90
CAPÍTULO III.....	93
CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.....	93
1. REGISTRO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LOS ENCUESTADOS.....	93
2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA.....	94
PROPUESTA LEGISLATIVA QUE POSTULA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TERMINACIÓN CONSENSUAL Y ANTICIPADA EN LA ETAPA PROCESAL INTERMEDIA O PREVIA AL JUICIO ORAL	100
CONCLUSIONES	103
RECOMENDACIONES.....	104
BIBLIOGRAFÍA	105

RESUMEN

El reformado Código Procesal Penal, que reestructura el enjuiciamiento penal peruano, está orientado a conseguir una justicia penal transparente, pero, sobre todo, rápida y efectiva, por esta razón, el nuevo esquema procesal en el que el juicio oral es de carácter excepcional, garantiza, en cada etapa o fase del proceso, una solución consensuada del conflicto penal, como una manifestación actual de la justicia penal por negociación previa.

Precisamente, la terminación consensuada y anticipada del proceso penal, es uno de los mecanismos que se han implementado con el propósito de evitar el traslado innecesario a la fase de juzgamiento (fase estelar). Su aplicación, según el CPP, solo hasta antes de formularse por escrito acusación fiscal, evidenciaría serias inconsistencias con las razones políticas criminales por las que se decidió incorporarlo al sistema penal de justicia.

La celebración de la terminación anticipada, sobre la base del consenso entre las partes, genera beneficios para el imputado, al definirse anticipadamente el caso penal; para el Estado, puesto que, al reducirse el tiempo de duración del proceso penal, se reducirán los gastos que implica cada procesamiento; para el agraviado, al resarcirse el daño ocasionado de forma oportuna y en etapas previas.

En ese contexto, la aplicación o procedencia de la terminación anticipada, inclusive en la etapa intermedia, también permitirá simplificar el proceso penal y descongestionar la elevada carga procesal, sobre todo si lo que se busca es continuar con la operatividad de la reforma de la justicia penal, sin que ello signifique desnaturalizar el proceso penal, ni vulnerar garantías procesales.

De esa manera, desde nuestro punto de vista político criminal, consideramos que, una modificatoria legislativa que tenga por objeto implementar la aplicación de la terminación consensuada y anticipada del proceso penal en la etapa previa al juicio oral, implicaría no solo un cambio normativo, sino también, una verdadera reforma del sistema penal de justicia y la forma de abordar la gestión procesal bajo nuevas orientaciones con enfoque de eficiencia y celeridad.

Palabras claves: terminación anticipada, etapa intermedia, simplificación procesal, descongestión procesal, garantías procesales.

ABSTRACT

The 2004 Code of Criminal Procedure, which amends the Peruvian criminal procedure, is aimed at achieving transparent criminal justice, but above all, rapid and effective, for this reason, the new procedural scheme in which oral proceedings are exceptional, ensures, at each stage or phase of the process, a consensual resolution of the criminal dispute, as a current manifestation of criminal justice by prior negotiation.

Precisely, the early termination of criminal proceedings is one of the mechanisms that have been implemented with the purpose of avoiding unnecessary transfer to the oral trial stage (stellar phase). Its application, according to the CPP, only before a written prosecution indictment was filed, would reveal serious inconsistencies with the criminal political reasons for which it was decided to incorporate it into the criminal justice system.

The holding of early termination, on the basis of consensus between the parties, generates benefits for the accused, when the criminal case is defined in advance; for the State, since, by reducing the duration of the criminal proceedings, the costs of each prosecution shall be reduced; for the aggrieved party, by compensating for the damage caused in a timely manner and in advance stages.

In this context, the application of the early termination of criminal proceedings, including at the intermediate stage, will also make it possible to simplify criminal proceedings and ease the high procedural burden, especially if the aim is to continue the operation of the reform of the criminal justice system, without distorting the criminal process or violating procedural guarantees.

Thus, from a criminal political perspective, we consider that, a legislative amendment aimed at implementing the application of the consensual and anticipated termination in the intermediate stage - or prior to the oral trial - of the common criminal proceedings, would imply not only a policy change, but also a real reform of the criminal justice administration system and the way to approach procedural management under new guidelines with a focus on efficiency and speed.

INTRODUCCIÓN

La imposibilidad de solucionar los conflictos de relevancia penal a través del desarrollo lineal, secuencial del proceso penal en nuestro país, en atención a la continua y creciente carga procesal de los despachos judiciales, generó que el Estado, con ocasión de reformar y reestructurar el proceso penal peruano, decidiese implementar mecanismos de solución alternativos que, a diferencia de la solución tradicional, permitiesen definir los casos penales en un menor tiempo posible, es decir, reduciendo o eliminando las etapas procesales.

En efecto, se incorporó la terminación anticipada del proceso penal, como figura procesal orientada a la celeridad del procesamiento del imputado, solo durante el periodo de investigación preparatoria formalizada, es decir, hasta antes de que el fiscal formulase acusación escrita, surgiendo así el interés por analizar los fundamentos político criminales y los beneficios en el sistema penal de justicia que motivaron su aplicación en el proceso penal reformado en tal etapa procesal, y de esa manera, poder advertir las inconsistencias que produce una interpretación rigurosa y literal de la norma, si conforme con el nuevo esquema, la etapa del juicio oral tiene carácter excepcional.

Entonces, es así que este trabajo de investigación tiene como objetivo general implementar la aplicación de la terminación consensuada y anticipada del proceso penal peruano, inclusive, en la etapa intermedia o previa al juicio oral, puesto que, no solo se pretende resolver con rapidez y eficacia los conflictos penales por el consenso entre las partes, sino, además, se buscaría reducir los costos estimados por proceso penal y satisfacer anticipadamente al actor civil por las consecuencias de la actividad delictiva.

Por ello, este trabajo de investigación, de conformidad con la información y los datos recabados, ha sido estructurado en tres capítulos.

En el capítulo I, se desarrollará la reforma y enfoques del proceso penal y los criterios político criminales que justificaron la incorporación de la terminación anticipada como un mecanismo alternativo frente a la problemática del sistema de justicia penal tradicional.

Por su parte, en el capítulo II, a partir de una discusión argumentativa de los fundamentos expuestos por la máxima instancia jurisdiccional en el acuerdo plenario 5-2009, se analizará si la celebración de la audiencia de terminación anticipada, luego de haberse formulado acusación escrita, desnaturaliza o no el proceso penal común o si su aplicación en la etapa intermedia vulnera los derechos o garantías procesales de la víctima del delito.

Finalmente, en el *capítulo III*, se demostrará los beneficios de carácter procesal y económicos que genera al sistema y servicio de administración de justicia penal la celebración de la terminación o definición consensuada y anticipada en la etapa procesal intermedia, para lo cual creímos conveniente la aplicación de una encuesta y entrevista tanto a los jueces de investigación preparatoria, como a los fiscales y abogados defensores.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Los magistrados supremos en lo penal, en el acuerdo plenario 5-2009/CJ-116 del 13 de noviembre de 2009, analizan diversos aspectos esenciales del mecanismo simplificador de terminación anticipada del proceso penal común, y acuerdan que esta salida alternativa procedía, como lo prescribe el CPP de 2004, únicamente durante la investigación preparatoria formalizada, estableciendo determinados criterios de interpretación, con carácter de doctrina legal, que debían ser invocados por los órganos jurisdiccionales de todas las instancias judiciales, sin perjuicio de fundamentar el apartamiento de aquellos criterios.

No obstante, si bien la máxima instancia judicial había ratificado el límite temporal previsto por el numeral 1 del artículo 468 de la norma adjetiva penal para la procedencia y la aplicación de la terminación anticipada, en algunos distritos judiciales del país – en los que se encontraba vigente el CPP de 2004 – se incoaron y aprobaron en la etapa intermedia del proceso penal, procesos simplificadores de terminación anticipada.

Precisamente, los jueces de investigación preparatoria de aquellos despachos judiciales, sustentaron su desvinculación de los criterios de interpretación adoptados por el acuerdo plenario 5-2009/CJ-116,

basándose principalmente en cuestionar los fundamentos jurídicos sobre los que la máxima instancia jurisdiccional del Poder Judicial se había amparado para desestimar la aplicación de dicho proceso simplificador en una etapa de preparación a juicio o intermedia del proceso penal ordinario, sin haber considerado, las razones político criminales por las que se había implementado como mecanismo alternativo al desarrollo tradicional del proceso penal.

El problema surge porque los órganos jurisdiccionales, limitados – entendemos que solo por razones de autoridad – a los criterios de interpretación establecidos por los magistrados supremos en el acuerdo plenario 5-2009/CJ-116, se mantendrían en un sistema de administración de justicia penal caracterizado, entre otros defectos, por su lentitud y su deficiente nivel operativo, lo que impediría, consecuentemente, descongestionar los despachos judiciales, reducir los costos que le genera al Estado el funcionamiento del aparato judicial y satisfacer anticipada y oportunamente al agraviado por el daño ocasionado como consecuencia del delito.

Pero, además, el problema se manifiesta porque en nuestro sistema de penal de justicia, los criterios de interpretación heterogéneos, respecto del sentido y alcance de la incorporación de la terminación consensuada, como una definición anticipada del proceso penal común, en una fase procesal distinta a la prevista por la norma adjetiva penal, deberían encontrar uniformidad en las políticas de simplificación o reducción procesal y de descongestión judicial; factores sobre los que precisamente se decidió por diseñar un nuevo modelo sistemático procesal, con la finalidad de alcanzar resultados de reforma.

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

¿Cuáles son los criterios político criminales que fundamentan la aplicación de la terminación o definición consensuada y anticipada del procesamiento penal común en la etapa procesal intermedia o previa al juicio oral?

2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO.

En principio, el Código Procesal Penal vigente, está orientado a alcanzar una justicia penal transparente, pero, sobre todo, más rápida y efectiva, garantizando una solución oportuna y simplificada del conflicto penal, muchas veces basada en la negociación y consenso de las partes del proceso penal, como una manifestación de la denominada justicia penal negociada.

Dicho esto, el presente trabajo de investigación se ha realizado porque consideramos, que la celebración y aplicación del proceso simplificador de terminación anticipada del proceso penal común en etapa intermedia, evitaría el traslado innecesario a la etapa de juicio oral, un caso o conflicto penal en el que, por su naturaleza, no existiría controversia respecto de la pretensión penal ni civil, lo que a su vez, permitiría descongestionar, a partir de un enfoque de celeridad y economía procesal, el sistema judicial penal, de modo que, ello ayudaría a continuar con la operatividad de la reforma procesal penal, sin desnaturalizar el proceso penal, ni vulnerar los derechos o garantías procesales de sus intervinientes.

Asimismo, este trabajo de investigación se ha llevado a cabo porque estimamos que, desde la vigencia del Código Procesal Penal, uno de los

objetivos primordiales y estratégicos de la reforma del proceso penal, es la celeridad en la resolución de los conflictos penales; de ahí que, promover la aplicación de salidas alternativas a través de mecanismos de simplificación procesal en un sistema de administración de justicia penal como el nuestro, generaría en los ciudadanos, sin duda alguna, una mejor visión o perspectiva del sistema judicial penal, al advertir una resolución judicial rápida de los casos penales, sin que ello signifique, como se ha dicho, vulnerar garantías procesales de las demás partes procesales.

Del mismo modo, creemos que, los magistrados de las distintas sedes judiciales del país, al apartarse de la doctrina legal establecida por la Corte Suprema de Justicia en el acuerdo plenario N.º 05-2009/CJ-116, no pretenden obstruir el modelo procesal, ni desnaturalizar el proceso penal, sino que, basados en los principios de reforma procesal y en las razones de política criminal que fundamentan la aplicación de la terminación anticipada del proceso penal, sólo cumplen con solucionar con celeridad, eficacia y coherencia normativa los conflictos penales jurídicamente relevantes, lo que en buena cuenta, supone además una justicia pronta y eficaz para el agraviado del delito.

En definitiva, entendemos que, desde una perspectiva político criminal, una modificatoria legislativa que tenga por objeto implementar la aplicación de la terminación anticipada y consensuada del proceso penal común en la etapa intermedia o previa a juicio oral, implicaría no solo un cambio normativo, sino también una verdadera reforma del sistema de administración de justicia penal y la forma de abordar la gestión procesal bajo nuevas orientaciones con enfoques de eficiencia y celeridad.

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. OBJETIVO GENERAL

1. **Implementar** la aplicación de la terminación consensuada y anticipada, inclusive, en la etapa procesal intermedia o previa a juicio oral, con la finalidad de resolver con celeridad y eficacia los conflictos jurídicos penales, así como satisfacer anticipada y oportunamente al agraviado (actor civil) por las consecuencias de la actividad delictiva.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. **Establecer** las consideraciones o criterios político criminales de la incorporación de la terminación anticipada en el reformado proceso penal peruano como respuesta a la crisis del sistema de justicia penal.
2. **Determinar** si la celebración de la terminación consensuada y anticipada del proceso penal en la etapa previa al juicio oral desnaturaliza el proceso penal común y si su aplicación en dicha etapa procesal vulnera los derechos o garantías procesales de la víctima del delito.
3. **Demostrar** los beneficios que genera en el sistema de justicia penal, la incorporación de la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal común o previa el juicio oral.

4. HIPÓTESIS

Los criterios político criminales que fundamentarían la celebración y aplicación de la terminación consensuada y anticipada del proceso penal en la etapa procesal intermedia y cumplirían con las orientaciones de la reforma del sistema de administración de justicia penal, son: la simplificación de la duración del proceso penal y la descongestión de la sobrecarga procesal de los despachos judiciales.

5. VARIABLES

5.1. Variable independiente:

La aplicación o procedencia de la terminación consensuada y anticipada en la etapa procesal intermedia o previa a juicio oral.

5.2. Variable dependiente:

Las razones político criminales de simplificación y de descongestión del proceso penal.

6. MARCO TEÓRICO

6.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA.

1. Caballero García (2019) en la tesis doctoral titulada “El proceso de terminación anticipada en la etapa intermedia para mejorar la celeridad y descarga procesal”, establece que, la terminación anticipada constituye un mecanismo de celeridad procesal que, al aplicarse en la etapa intermedia del proceso penal, contribuye a la descarga procesal. Asimismo, sostuvo que la celeridad del

proceso penal genera en la ciudadanía mayor confianza en el sistema de justicia penal.

2. Burgos Mariños (2011) en la tesis doctoral titulada “Factores jurídicos procesales inquisitivos en el Código Procesal Penal que impiden consolidar el modelo acusatorio en el Perú”, afirma que, en el Código Procesal Penal existen normas como la de la terminación anticipada que, al ser interpretadas y aplicadas de manera literal por los operadores de justicia, pondrán en riesgo la reforma del proceso penal. Precisa que, las audiencias en el modelo acusatorio son de naturaleza flexible y funcional, de tal forma que, la audiencia de control de acusación puede transformarse en una de terminación anticipada.
3. Gálvez Barraza (2018) en la tesis de maestría titulada “La efectividad de la terminación anticipada en el marco del Código Procesal Penal: análisis en el distrito judicial de Lima Norte en el periodo 2011 – 2015”, manifiesta que, con la interpretación que realizan de la terminación anticipada los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el acuerdo plenario 5-2009/CJ-116, al limitar su aplicación solo a la etapa de investigación preparatoria, ha influido de forma negativa en la efectividad de este proceso como mecanismo de simplificación.
4. Robles Quezada (2016) en la tesis de pregrado titulada “Criterios para la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal peruano”, determina que, la simplificación del proceso penal y el descongestionamiento procesal, constituyen criterios que sustentan la aplicación de la

terminación anticipada en una etapa distinta a la de investigación preparatoria, los que fundamentan el deslinde o la desvinculación del acuerdo plenario 5-2009/CJ-116.

5. Martínez Moso y Melón Gutiérrez (2019) en la tesis de pregrado titulada **“Prohibición de la terminación anticipada en la etapa intermedia y su violación a la pena justa”**, manifiestan que, la aplicación del proceso especial de terminación anticipada en la etapa intermedia, no vulnera los principios de economía y celeridad procesal, alivia la carga procesal y mejora la administración de justicia. Señalan, además, que la prohibición de la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal prevista en el acuerdo plenario 5-2009/CJ-116, afecta el derecho a la pena justa del procesado.

6.1. BASE TEÓRICA

Para efectos del presente trabajo de investigación, consideramos conveniente dividir en dos posturas, las posiciones doctrinarias y jurisdiccionales de quienes están y no de acuerdo con la procedencia de la terminación anticipada en la etapa procesal intermedia o fase previa a juicio oral.

1. POSTURAS CON PERSPECTIVA O VISIÓN LEGALISTA:

Según Reyna (2014) cuando se refiere a la celebración de la terminación o definición anticipada en la etapa o fase procesal intermedia, establece que: “Las partes pueden solicitar la terminación anticipada del proceso en tanto no se haya

formulado acusación fiscal. Ergo, la formulación de acusación fiscal impide que se admita a trámite cualquier petición de terminación anticipada del proceso” (pp. 180-181).

Por su parte, Neyra (2010), respecto del momento para aplicar la terminación anticipada, precisa que:

[...] la oportunidad para aplicar la terminación anticipada es durante la investigación preparatoria, como está expreso en la norma y, no en la etapa intermedia, pues las funciones de la etapa intermedia no lo permiten [...] Aplicar la terminación anticipada en esta etapa es un contrasentido, pues se acusa para abrir juicio oral, y no para que se abra una audiencia de terminación anticipada. (pp. 469-470)

En esa línea, Bramont (2010), sobre la terminación anticipada en la audiencia de control de la acusación fiscal, afirma que: “En el CPP de 2004 existen limitaciones a la incoación del proceso de terminación anticipada. Esto es así, porque puede solicitarse antes que el fiscal formule acusación y después de formalizada la investigación preparatoria” (p. 130).

Finalmente, la CSJ de Ventanilla (2018) en el Pleno jurisdiccional en materia penal - distrital, concluyó por unanimidad de votos que: “No procede la aplicación de la terminación anticipada en la audiencia de control de acusación” (p. 4).

2. POSTURAS CON PERSPECTIVA O VISIÓN REFORMISTA:

Al respecto, Taboada (2013), en cuanto al límite temporal para incoar la terminación consensuada y anticipada del proceso, afirma que: “[...] Una interpretación meramente literal podría conducirnos hacia una barrera legal infranqueable en la proposición de una terminación anticipada en la etapa intermedia [...] (p. 232).

Por su parte, Burgos (2010), cuando se refiere a la posibilidad de que se aplique la terminación consensuada y anticipada en la etapa previa al juicio oral, sostiene que:

Otra norma cuya interpretación literal afecta el modelo acusatorio es la prevista en el inciso 1 del artículo 468, el que impide la aplicación del proceso especial de terminación anticipada durante la etapa intermedia, pues no propicia las salidas alternativas y tener al juicio oral como una etapa principal y excepcional. También afecta al derecho del imputado a una pena más justa y a la disponibilidad que tiene sobre su derecho al juicio oral. (p. 107)

De igual manera, Villavicencio (2008), sobre la terminación consensuada y anticipada del proceso penal en la audiencia de control de la acusación fiscal, señala que:

La realidad ha superado a la norma y hemos visto la aplicación de la terminación anticipada en la audiencia de

control de acusación fiscal. [...] Es por ello que, por ahora, en Huaura la realidad ha determinado que el momento procesal para que se incoe la aplicación de la terminación anticipada del proceso debe ser flexible y depende de las circunstancias que hagan propicio el consenso entre las partes. (pp. 117-118),

Asimismo, Ramos (2006), acerca de la terminación consensuada y anticipada en la etapa previa al juicio oral, precisa que:

La restricción para optar la terminación anticipada en la audiencia preliminar no es compatible con la lógica de reducción de la carga procesal [...]. Mas aun cuando el código establece las actuaciones que se pueden realizar durante la audiencia preliminar, señala que las partes pueden instar la aplicación de un criterio de oportunidad. De modo que, si es posible aplicar criterios de oportunidad en durante la audiencia preliminar, por lógica y coherencia, también debería ser posible aplicar la terminación anticipada. (pp. 136-137)

Del mismo modo, Víctor Raúl Reyes Alvarado (2006), sobre la oportunidad de aplicar la terminación consensuada y anticipada, menciona que:

La celebración de una audiencia de terminación anticipada [...] puede ser realizada hasta en el momento de la realización de la audiencia preliminar de control de acusación, de ser así, esta se suspenderá, y si no se dicta

sentencia aprobatoria debe continuarse con la audiencia preliminar de control de acusación. (p. 145)

En esa línea, la Corte Superior de Justicia de Ancash (2018) en el Pleno jurisdiccional en materia penal - distrital, acordó por mayoría:

Sí es procedente la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia desde una interpretación amplia, pues el fin de la terminación es evitar etapas y audiencias innecesarias; además debe tenerse en cuenta la carga procesal que afronta las fiscalía y juzgados en todo el país. (p. 15)

Por último, la Corte Superior de Justicia de Ayacucho (2017) en el Acuerdo 05-2017-ETDINCPP/CSJAY, acordaron que:

Si es posible llevar a cabo el acuerdo de terminación anticipada en la etapa intermedia, solo sí, se encuentran presentes todas las partes legitimadas tales como: Fiscal, acusado con su abogado defensor, agraviado de estar constituido en actor civil y, cuando no haya posición alguna de las partes. (p. 10)

7. TIPO DE INVESTIGACIÓN

7.1. De acuerdo al fin que persigue: Básica

7.2. De acuerdo al diseño de investigación: Descriptiva

8. MÉTODOS Y TÉCNICAS

8.1. MÉTODOS

8.1.1. MÉTODOS GENERALES

✓ **Histórico:**

Para el análisis de los antecedentes normativos de la terminación consensuada y anticipada del proceso penal y de su tratamiento legal por los magistrados en lo penal de la Corte Suprema de Justicia.

✓ **Sintético:**

Para sistematizar, resumir y estructurar la información recopilada sobre terminación anticipada, en libros, tesis, revistas y artículos jurídicos, informes, guías de actuación, reportes estadísticos, sentencias judiciales y acuerdos plenarios.

✓ **Analítico:**

Para analizar y comprender la naturaleza jurídica de la terminación consensuada y anticipada del proceso penal y los fundamentos normativos que sustentan su aplicación en la etapa previa al juicio oral, como mecanismo de simplificación procesal.

✓ **Inductivo:**

Para determinar que la terminación anticipada es un mecanismo procesal consensual y alternativo propio

de la reforma y reestructura del procesamiento o enjuiciamiento penal, que obedece a la política criminal de simplificación procesal y de descongestión del proceso penal.

✓ **Deductivo:**

Para inferir que la terminación anticipada del caso penal, basada en el consenso, es un mecanismo de simplificación y descarga procesal que también puede aplicarse en la etapa previa al juicio oral.

8.1.2. MÉTODOS ESPECÍFICOS

✓ **Método estadístico:**

Para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos obtenidos respecto de la aplicación de la terminación anticipada del proceso penal en la etapa previa a juicio oral.

8.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

8.2.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

- **Análisis de contenido o documentales:** Para efectos de fundamentar la investigación con lo aportado por diferentes autores sobre la terminación consensuada y anticipada del caso penal y su aplicación en la etapa previa al juicio oral.

- **Entrevista:** Con el propósito de recopilar y captar la información proporcionada por los entrevistados sobre los beneficios que genera en el sistema penal de justicia la procedencia de la terminación consensuada y anticipada del caso penal en la etapa previa al juicio oral
- **Encuesta:** A fin de que la población objeto de estudio opinen a través de respuestas concretas y específicas acerca de la terminación consensuada y anticipada del proceso penal y respecto de su aplicación en la etapa previa al juicio oral

8.2.2. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

- Fichas bibliográficas o de registro de datos
- Guía de entrevista y libreta de notas
- Guía de encuesta

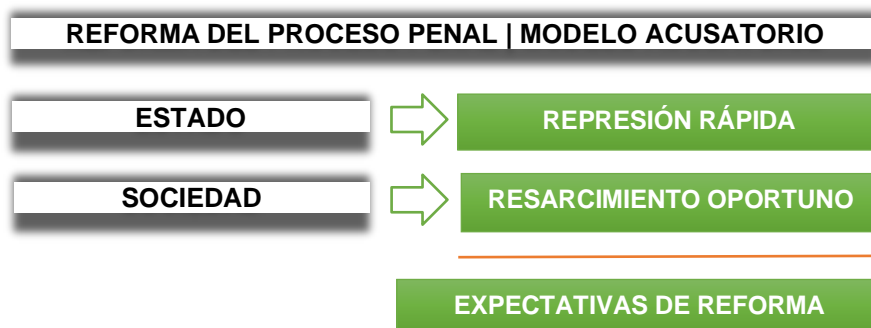
CAPÍTULO I

TERMINACIÓN ANTICIPADA Y PROCESO PENAL: LA INCORPORACIÓN DE UN MECANISMO CONSENSUAL DE SIMPLIFICACIÓN PROCESAL

1. REFORMA DEL PROCESO PENAL: UNA RESPUESTA DEL ESTADO A LA CRISIS DE LENTITUD Y SOBRECARGA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.

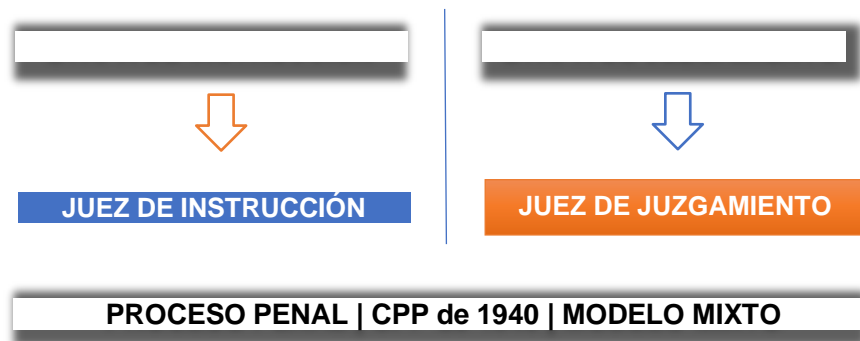
1.1. EVOLUCIÓN, REFORMA Y EXPECTATIVAS DEL PROCESO PENAL PERUANO: INTENTOS HACIA UNA SOLUCIÓN RÁPIDA Y OPORTUNA DEL CONFLICTO PENAL.

En nuestro país, los intentos de reforma procesal penal, estuvieron orientados a buscar y conseguir, entre otros aspectos, una solución o definición rápida, efectiva y oportuna de los conflictos jurídicos penales, con el fin de impedir la congestión procesal y, con ello, la saturación del sistema penal de justicia, y generar confianza en la sociedad por las expectativas de justicia en la represión y resarcimiento del delito.



Precisamente, hasta antes del nuevo sistema de enjuiciamiento, el proceso penal peruano evolucionó de la siguiente manera:

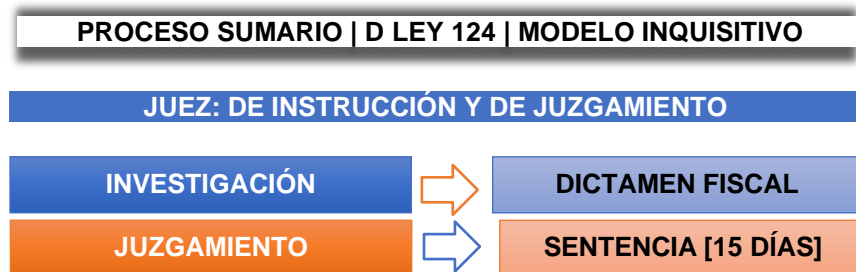
- **Ley 9024 | 1940 | Código de Procedimientos Penales:**
Reguló por primera vez el proceso penal denominado “ordinario”, “inspirado en un sistema procesal mixto, que importa la admisión de ciertos matices tanto del acusatorio (acusación fiscal) como del inquisitivo (instrucción judicial)” (Salas, 2011, p. 12). De modo que, el clásico proceso penal, estaba estructurado como se gráfica:



- **Decreto Ley 17110 | 1968 | modificó el CPP de 1940:**
Con esta norma se implementó el proceso penal denominado “sumario”, aplicable para determinados hechos punibles. A diferencia del proceso penal ordinario, este proceso constaba de una etapa: la instrucción. En esta etapa única del proceso, era el juez instructor quien investigaba y sentenciaba a su vez.

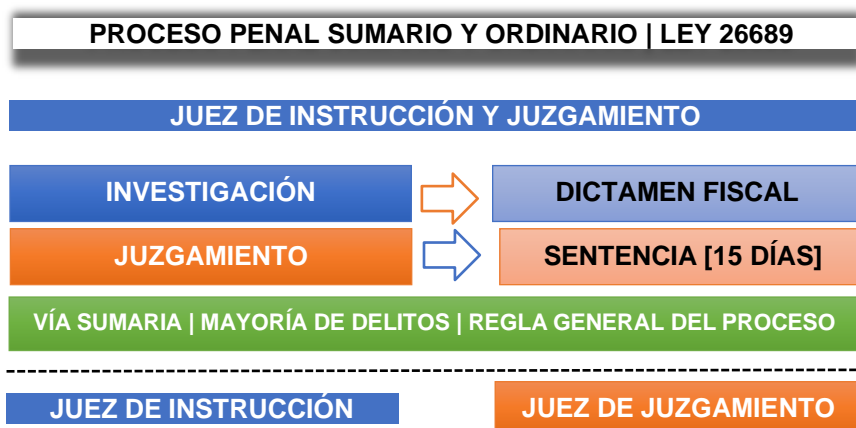


- **Decreto Legislativo 124 | 1981 | derogó Decreto Ley 17110:**
esta norma tuvo por objeto ampliar los hechos punibles que debían tramitarse en la vía sumaria. Así, el juez instructor seguía facultado para investigar y sentenciar en el proceso sumario.



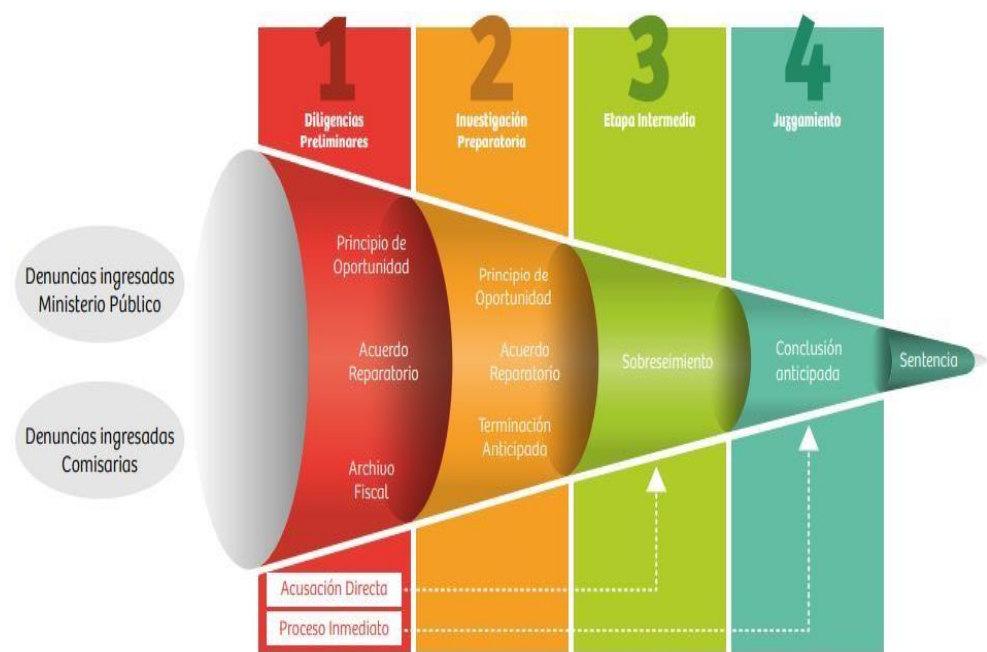
- **Ley 26689 | 1996 | Estableció los hechos delictivos que se tramitarían como procesos ordinarios:**

De acuerdo con esta ley, los hechos delictivos cuya tramitación no estaban comprendidos en la vía ordinaria, quedaban sujetos a la tramitación en vía sumaria prevista en el Decreto Legislativo 124. De esta manera, como anota Reyna (2010), “el proceso sumario pasó de ser la excepción, a convertirse en la regla” (p. 30).



No obstante, los fracasados intentos de reforma procesal penal y las exigencias por la sociedad de un eficiente servicio de justicia penal, propiciaron la necesidad de implementar – o poner en marcha – un nuevo sistema penal de justicia y de reestructurar el proceso penal peruano, acorde con la tendencia legislativa de aquellos países que acogieron la reforma del procesamiento penal. Así, en el año 2004, entraba en vigencia un novedoso y reformado enjuiciamiento penal: Decreto Legislativo 957.

Nuestro actual modelo de enjuiciamiento penal, está inspirado en un sistema procesal acusatorio, caracterizado, entre otras notas esenciales, por promover y priorizar el uso de salidas o mecanismos alternativos, como reacción a la crisis del servicio y sistema penal de justicia, constituyéndose en un eje estratégico para la ansiada consolidación del proceso penal.



1.2. ENFOQUES DEL PROCESO PENAL REFORMADO:

1.2.1. ENFOQUE CONSTITUCIONAL: VISIÓN GARANTISTA DEL PROCESO PENAL COMÚN REFORMADO.

No cabe duda, que el proceso penal, es el instrumento para el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado y, con ello, para la represión jurídica del hecho punible cometido, es decir, “el proceso penal existe para la tutela del derecho de penar estatal” (San Martín, 2015, p. 297).

Por esta razón, con el fin de evitar posibles arbitrariedades en el ejercicio desmedido e injustificado del poder punitivo estatal, el reformado sistema procesal penal introdujo en una serie de garantías procesales con relevancia constitucional que actúan como “mecanismos jurídicos que impiden un uso arbitrario o desmedido de la coerción penal” (Salas, 2011, p. 26).

En efecto, estas garantías procesales penales denominadas por Rodríguez (2008) “escudos protectores del justiciable que repudian la arbitrariedad” (p. 139), surgen, justamente, como señala Reyna (2014), “de la comprensión del proceso penal como instrumento de realización de los derechos fundamentales” (p. 112).

Ahora bien, las garantías procesales penales - en atención a su especial importancia - aparecen contempladas en el Título Preliminar (TP) del CPP de 2004, como “normas rectoras del

proceso penal” (Cubas, 2016, p. 55). Ello quiere decir, que las normas de ese apartado prevalecen y “orientan toda la actuación del sistema procesal, así como la interpretación de las normas” (Neyra, p. 2010, p. 122).

De manera que, de acuerdo con el artículo X¹ del TP, las garantías procesales penales constituyen, reglas, criterios O pautas obligatorias de orden constitucional que fundamentan el sentido y alcance de las disposiciones procesales en el desenvolvimiento del proceso penal, y con ello, garantizan el reconocimiento de los derechos fundamentales de aquellas personas sometidas a persecución penal.

Al respecto, anota Rodríguez (2008), “la relación entre el derecho procesal penal y el derecho constitucional no es, pues, una cuestión meramente académica, una entelequia dogmática, sino un imperativo para el servicio de justicia y sus operadores” (p. 141).

Esa íntima relación entre el proceso penal y la Constitución, ha sido confirmada por la máxima instancia judicial en el acuerdo plenario extraordinario 2-2016/CJ-116 del 01 de junio de 2016, al establecer que:

El Código Procesal Penal de 2004, estructuró el proceso penal a partir de un procedimiento común, destinado,

¹ **Artículo X.- Prevalencia de las normas de este Título:** Las normas que integran el presente Título prevalecen sobre cualquier otra disposición de este Código. Serán utilizadas como fundamento de interpretación”.

desde una perspectiva general, a todo tipo de delitos y situaciones procesales - que a su vez se erigió en el procedimiento ordinario, bajo la primacía del principio procesal de contradicción y del principio procedimental de oralidad - y con la plena asunción de las garantías constitucionales procesales que definen todo proceso jurisdiccional justo y equitativo, acorde con el programa procesal penal de la Constitución. (pp. 2-3)

En ese sentido, como anota Talavera (2008), “la Constitución se convierte pues, en el referente por antonomasia no sólo del legislador procesal penal, sino de toda actuación de los encargados de la persecución penal y de las personas que de una u otra manera son vinculadas a un caso penal” (p. 205). Esa afirmación ha llevado a que Salas (2011), sostenga que, “este nuevo proceso tiene una estructura esencialmente constitucional” (p. 26).

1.2.2 ENFOQUE DE CELERIDAD: VISIÓN SIMPLIFICADORA Y ECONÓMICA DEL PROCESO PENAL REFORMADO.

En principio, la dificultad más importante del sistema penal de justicia, es la lentitud o la ausencia de celeridad en el desarrollo de los procesos penales. Justamente, la carga procesal y los cuestionamientos por parte de la sociedad al rendimiento limitado del sistema de justicia penal, no hacen sino evidenciar esa situación problemática.

En ese contexto, el legislador nacional, acorde con los países que acogieron la reforma del enjuiciamiento penal, introdujo en el CPP de 2004, diversos mecanismos, vías o fórmulas alternativas tendientes a simplificar y acelerar el desarrollo del proceso penal, entre las que destaca, sin alguna duda, la terminación consensual y anticipada del proceso penal.

Precisamente, la **Exposición de Motivos del CPP de 2004**, al respecto, señaló:

Razones de política legislativa, presentes también en la legislación comparada, orientadas a evitar la congestión procesal y la saturación del sistema de justicia penal ordinario, han determinado que conjuntamente con el proceso común se regulen una gama de vías alternativas que permitan diversificar las especialidades procedimentales por razón de las personas y por razón de la materia y, de otro lado, los procesos simplificados desarrollados bajo el principio de consenso. Entre estos, es del caso hacer mención a los procesos por razón de la función pública, el proceso de terminación anticipada y el proceso de colaboración eficaz.

Ahora bien, para la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal de 2004 (2014), la consolidación de la reforma procesal penal, en la medida de la problemática constatada en distintos distritos judiciales en los que se había

implementado el nuevo sistema procesal penal², exigía el cumplimiento de los siguientes objetivos:

- **OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1:**
Reducir la carga procesal del régimen de 1940.
- **OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2:** Lograr un tratamiento óptimo de los procesos de liquidación.
- **OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3:**
Alcanzar altos y notables niveles de productividad en el servicio penal de justicia. (p.31)

La reforma de calidad a favor del sistema de justicia penal - a la que se refiere en otros términos el OEE3 - proponía fundamentalmente, *en relación con la excesiva duración de los procesos penales*, promover y priorizar, en atención a su efectividad, el uso de salidas o vías alternativas al proceso penal común, es decir, ya sea a través de mecanismos de depuración óptima o de solución oportuna de casos penales.

Esta propuesta normativa, permitiría en la práctica procesal, a decir de Brousset (2008), una respuesta punitiva rápida a la criminalidad siempre en incremento, con la finalidad de controlar la desbordante carga procesal del sistema de justicia penal" (p. 78).

² En ese contexto, por ejemplo, el "Plan local de consolidación para la reforma procesal penal en el Distrito Fiscal de Lambayeque", se dirigió únicamente al cumplimiento de los OEE 2 y 3.

En ese sentido, la optimización del sistema penal de justicia, consistirá sustancialmente en fomentar la aplicación de salidas o mecanismos alternativos tendientes a simplificar y acelerar el proceso penal, y de esa manera, manejar la elevada recarga procesal de los despachos jurisdiccionales y mejorar la perspectiva de la sociedad sobre el rendimiento del sistema y servicio de administración de justicia penal.

Pero, además, la instauración de mecanismos aceleradores y simplificadores del proceso penal, permitirán, como señala Reyna (2014), con quien coincidimos, “gestionar mejor los recursos económicos escasos con los que cuenta el sistema de administración de justicia penal” p. 111).

De otro lado, un sistema penal de justicia con enfoque de celeridad en el procesamiento del agente, reclama fomentar en los operadores jurídicos una cultura de definición rápida, pero también efectiva, de los casos penales que prioricen el uso de salidas o mecanismos alternativos que permitan simplificar el tiempo de duración de los procesos penales comunes. Sin embargo, esta gestión de cambio de cultura jurídica, se ha convertido en un desafío para la ansiada consolidación de la reforma procesal penal.

Así pues, la inaplicación del inciso 1 del artículo 468 del CPP, por interpretaciones literales de órganos jurisdiccionales con una cultura jurídica inquisitiva, tiende a la afectación de este enfoque de celeridad procesal y de esta manera, se apartan de las razones político criminales por las cuales el Estado se

decidió por implementar, nuevas formas de resolución de los conflictos penales.

1.3. SALIDAS ALTERNATIVAS AL PROCESO PENAL COMÚN: UNA NECESIDAD POLÍTICO CRIMINAL DE SOLUCIÓN RÁPIDA Y EFECTIVA.

Al respecto, conviene precisar previamente, que la crisis del sistema de justicia penal peruano, permite identificar – en nuestra opinión – las siguientes causas:



Por esta situación el sistema penal de justicia, evidenciada a través de distintos informes estadísticos, nuestro nuevo modelo procesal reformado, decidió implementar, a partir de un enfoque de celeridad

y economía procesales, mecanismos alternativos al desarrollo tradicional del proceso penal común. En ese entendido, las salidas alternativas al proceso penal no tienen un fin único.

Así, por el lado del imputado (al igual que lo sería para el acusado) y el agraviado, los mecanismos alternativos tienen por finalidad la pronta, oportuna y efectiva resolución del conflicto penal y la anticipada reparación económica por las consecuencias del hecho delictivo.

Por el lado del Estado, debido a su incapacidad para brindar una reacción acelerada a las trasgresiones de las normas penales a través del desarrollo del proceso penal en todas sus etapas [forma tradicional de resolución de conflictos penales], su propósito es el descongestionamiento procesal, y con ello, evitar la saturación del sistema penal de justicia.



En efecto, los mecanismos alternativos al proceso penal común, como reacción institucional a la crisis del sistema penal de justicia, a decir de Cubas (2016), “son soluciones diferentes a la tradicional persecución penal y que son percibidas como respuestas de alta calidad del sistema” (p. 642), ello, “debido a la imposibilidad material del Estado de perseguir y castigar todas las infracciones que se cometen” (Sánchez, 2020, p. 145).

Por ello, coincidimos con Brousset (2009) cuando afirma que, “las salidas alternativas al proceso penal son soluciones compatibles con una política criminal simplificadora” (p. 77). Precisamente, la terminación o definición consensuada y anticipada se sustenta en la idea de simplificación procesal

No obstante, si se pretende mejorar la capacidad de rendimiento del sistema de administración de justicia penal, a través del uso de mecanismos alternativos al proceso penal común - por ejemplo, la terminación anticipada - no es suficiente con contemplarlos en el cuerpo normativo, sino, además, se requiere necesariamente, como anota Burgos (2011), “desarrollar una práctica procesal orientada hacia valores y principios del modelo acusatorio” (p. 4). Fomentar un cambio de carácter cultural en los operadores jurídicos del nuevo sistema procesal penal, supone, en palabras de Binder (2005), “un duelo de prácticas, entre las viejas prácticas procesales inquisitivas y las nuevas prácticas procesales acusatorias” (p.25).

Este duelo de prácticas en un sistema penal acusatorio, permite que algunos operadores jurídicos, en disonancia con las orientaciones político criminales del proceso penal reformado, no prioricen el uso

de mecanismos alternativos y simplificatorios del proceso penal, como escenarios efectivos y oportunos para la solución rápida de los casos penales. En ese sentido, convertida en una causa más de la crisis existente, la cultura de aplicación literal de las normas en la práctica procesal, viene impidiendo la consolidación de la reforma procesal penal.

1.4. TIPOLOGÍA DE MECANISMOS ALTERNATIVOS: ACERCA DE LA SIMPLIFICACIÓN PROCESAL COMO EJE ORIENTADOR DE SU APLICACIÓN.

De acuerdo con la reestructuración del proceso penal común, el juicio oral, a decir de Reyna (2011), “se toma el eje central del proceso penal” (p. 113). Es la etapa principal, igual de importante que las demás etapas procesales, dentro del desarrollo secuencial del proceso penal. Pero, si los mecanismos alternativos – tendientes a la simplificación procesal – tienen como función evitar el periodo procesal de juzgamientos, entonces, podemos inferir que, el juicio oral además tiene carácter excepcional.

En efecto, las salidas alternativas, en orden a la excepcionalidad del juicio oral, están orientadas a impedir que los casos penales del sistema penal lleguen hasta dicha etapa procesal, posibilitando - en beneficio de los partes procesales - una solución, rápida, efectiva y oportuna de los conflictos penales, como sucede, por ejemplo, con la terminación anticipada.

En ese contexto, en nuestra opinión, las vías, salidas o definiciones alternativas, se clasifican de la siguiente manera:

1. Mecanismos procesales de depuración:

- **Orientación político criminal:** Simplificar o reducir el tiempo de resolución de los conflictos penales, y evitar, en atención a la menor lesividad del bien jurídico, el ingreso de casos penales a la fase de juzgamiento.
- **Forma de solución del conflicto:** Buscan resolver el caso penal a través del principio de consenso.
- **Salidas alternativas:** Principio de oportunidad y acuerdo reparatorio, considerados por la jurisprudencia y doctrina peruana como criterios de oportunidad.
- **Oportunidad procesal:** Etapa procesal de investigación preparatoria e intermedia [o previa al juicio oral] del proceso penal común.

2. Mecanismos procesales de simplificación:

- **Orientación político criminal:** Simplificar el tiempo de resolución de los casos penales, evitar el ingreso de los casos penales a la etapa procesal de juzgamiento, acortar las etapas procesales a fin de llegar con inmediatez al juicio oral y reducir el desarrollo de la audiencia de juicio oral.

- **Forma de solución del conflicto:** Buscan resolver el caso penal a través del principio del consenso, por evidencia delictiva o por la colaboración útil y eficaz.
- **Salidas alternativas:** Terminación anticipada, conclusión anticipada, proceso inmediato y colaboración eficaz.
- **Oportunidad procesal:** Etapas de investigación preparatoria y de juicio oral del proceso penal común.
Pero, de acuerdo, con esta investigación, bien podría aplicarse en la etapa intermedia.

En efecto, las salidas alternativas, constituyen mecanismos de definición rápida, efectiva y oportuna de los conflictos penales y de descongestión de la carga procesal, de los que se desprenden tanto los mecanismos de depuración como los de simplificación procesal, vinculados por una relación género - especie.

Sin embargo, en el ámbito procesal penal, se han distinguido los mecanismos de simplificación (especie) de las salidas alternativas, (género) aunque asumimos, que estas últimas, por la forma de definir los conflictos penales que demuestran en su tipología, se tratarían, en realidad, de mecanismos de depuración procesal.

Esa distinción conceptual ha generado que no exista uniformidad en los informes y reportes estadísticos y las guías de actuación relacionados con la reforma procesal penal, al momento de calificar a la terminación consensuada y anticipada del proceso penal como

un mecanismo procesal de depuración y a su vez, dentro de los mecanismos procesales de simplificación.

Entre los documentos o informes institucionales que evidencian el doble tratamiento terminación consensual y anticipada del proceso penal común, destacan

TERMINACIÓN ANTICIPADA TIPOLOGÍA	
Informe	III Informe Estadístico Nacional
Título	“Reforma procesal penal peruana”
Tratamiento	Salida alternativa

Fuente: Elaborado con datos del MINJUS (2016)

TERMINACIÓN ANTICIPADA TIPOLOGÍA	
Informe	II Informe Estadístico Nacional
Título	“Reforma procesal penal peruana”
Tratamiento	Mecanismo alternativo

Fuente: Elaborado con datos del MINJUS (2013)

TERMINACIÓN ANTICIPADA TIPOLOGÍA	
Guía	Guía de actuación del juez NCPP
Tratamiento	Mecanismo de simplificación procesal

Fuente: Elaborado con datos del PMSJ (2013)

TERMINACIÓN ANTICIPADA TIPOLOGÍA	
Guía	Guía de actuación del fiscal NCPP
Tratamiento	Proceso especial

Fuente: Elaborado con datos de Escuela de Ministerio Público (2013)

TERMINACIÓN ANTICIPADA TIPOLOGÍA	
Guía	Uso de salidas alternativas y mecanismos de simplificación procesal bajo el NCPP
Tratamiento	Mecanismo de simplificación procesal

Fuente: Elaborado con datos de MINJUS (s.f.)

TERMINACIÓN ANTICIPADA TIPOLOGÍA	
Reporte	Reporte estadístico
Título	Aplicación del Código Procesal Penal. Distrito Judicial de Lambayeque
Tratamiento	Salida alternativa

Fuente: Elaborado con datos de MINJUS (s.f.)

En ese contexto, en cuanto a la forma de resolución del conflicto penal, es necesario precisar que, si bien las vías o mecanismos alternativos al proceso penal buscan resolver el conflicto, de forma rápida y efectiva, el principio de consenso no es el único medio que se utiliza para dicho propósito.

Por consiguiente, no sería acertado distinguir una salida alternativa de un mecanismo simplificador, ni definir una figura jurídica como vía o salida alternativa, por el solo hecho de reconocer que su aplicación estuvo basada en el consenso entre las partes intervinientes, puesto que, bajo esa lógica, tendríamos que también considerar al proceso de colaboración eficaz como un mecanismo de depuración procesal, lo cual sería errado.

2. TERMINACIÓN ANTICIPADA CONSENSUAL: MANIFESTACIÓN DE UNA POLÍTICA CRIMINAL DE SIMPLIFICACIÓN PROCESAL.

2.1. EL PROCESO PENAL COMÚN Y LOS PROCESOS ESPECIALES ¿O SIMPLIFICADOS?

El CPP de 2004, regula dos clases de procesos que garantizan el respeto de los derechos fundamentales de la persona sometida a persecución penal:

PROCESO PENAL CLASES DE PROCESOS	
COMÚN U ORDINARIO	ESPECIALES

La noción de proceso común y procesos especiales, según Neyra (2010), “están en función de una clasificación de los procesos en razón de la generalidad o especialidad” (p. 429), es decir, en palabras de Bramont (2010), “los primeros se establecen para todo tipo de delitos; mientras que los segundos establecen particularidades de los procedimientos ordinarios, pero siguiendo la estructura básica de estos” (p. 5).

En lo que respecta al proceso común, San Martín (2015) refiere que, “está pensado para la tutela de la generalidad de los supuestos típicos” (p. 297). Por ello, Neyra (2010) sostiene que, “el proceso de carácter general es el conocido en la doctrina como proceso

ordinario, que encuentra su reconocimiento en nuestro NCPP con el nombre de proceso común para delitos” (p. 429). Entonces, a decir de Reyna (2014), “en la estructura procedimental que plantea el novísimo Código Procesal Penal, el proceso penal se rige, en términos generales, por las reglas establecidas por el denominado proceso penal común” (p. 33).

Por otro lado, la norma procesal penal, ha establecido un listado de procesos agrupados bajo el título de procesos especiales. Sin embargo, la propia Exposición de Motivos del CPP de 2004, hace mención que, conjuntamente con el proceso penal común, se ha determinado regular, las especialidades procedimentales, así como los procesos simplificadores.

Sobre el particular, asumimos que, para el legislador nacional, si bien entiende que entre ambas categorías existirían delimitaciones conceptuales que, sin duda, evidenciarían distinciones entre una y otra diversificación procesal, al agruparlas indistintamente en el libro quinto del CPP de 2004 bajo el rótulo de procesos especiales, entonces, tanto las especialidades procedimentales, así como los procesos simplificadores constituirían procesos especiales. Noción con la que discrepamos.

Por especialidades procedimentales entendemos a aquellas cuya tramitación se caracterizan particularmente por la condición del sujeto procesado y por razón de la materia a tramitarse. Así, en la primera estarían comprendidos los siguientes procesos: por razón de la función pública (sección II, libro V) y de seguridad (sección III, libro V); mientras que por el segundo se tramitarían los delitos de

ejercicio privado de la acción penal (sección IV, libro V) y las faltas (sección VII, libro V).

Los procesos simplificadores, serán aquellos que, basados en el principio de consenso y la colaboración útil y eficaz, tienen como propósito disminuir el tiempo de duración del procesamiento penal con la reducción de etapas y periodos procesales para la emisión de una decisión resolutoria. Así, corresponden a estos procesos de simplificación: la terminación anticipada (sección V, libro V) y la colaboración eficaz (sección VI, libro V).

Pero, además, creemos que, los supuestos de evidencia delictiva y de suficiencia probatoria, que vinculen al agente con la comisión del hecho punible, que se exigen en el proceso inmediato (sección I, libro V), al acortar el periodo de investigación preparatoria y unificar las etapas intermedia y de juicio oral en una sola audiencia, lo constituiría, de igual modo, en un proceso de simplificación procesal.

2.2. APRECIACIONES CONCEPTUALES RESPECTO DE LA TERMINACIÓN O ANTICIPADA DEL PROCESO PENAL.

2.2.1. PARA EL MÁXIMO INTÉRPRETE DE LA CONSTITUCIÓN:

El máximo intérprete de la Constitución peruana, en la **STC 855-2003-PH/TC del 8 de julio de 2004**, señaló:

Es un acuerdo entre el procesado y la fiscalía, con admisión de culpabilidad de alguno o algunos de los

cargos que se formulan, permitiéndole al encausado la obtención de la disminución punitiva.

Asimismo, en la **STC 5380-2008-PH/TC del 13 de abril de 2009**, precisó:

Es comprendida como el consenso al cual arriban las partes (fiscal e imputado, principalmente), por lo que le es exigible a estos la buena fe procesal, ya que esta institución jurídica no puede ser usada como un instrumento para eludir la privación de la libertad.

2.2.2. PARA LA MÁXIMA INSTANCIA JUDICIAL:

La máxima instancia judicial en el **AP 5-2009/CJ-116 del 13 de noviembre de 2009**, indicó:

Es un proceso penal especial y, además, una forma de simplificación procesal, que se sustenta en el principio del consenso. Es, además, uno de los exponentes de la justicia penal negociada.

Del mismo modo, en la **Casación 936-2018, Ayacucho del 03 de julio de 2020**, anotó:

Es una solución alternativa al proceso penal común, pues le pone fin en su estadio inicial y sin necesidad de llegar al plenario. La terminación anticipada se sustenta en el principio de consenso, en la medida en que implica un

acuerdo entre las partes sobre el hecho imputado y su consecuencia jurídica.

2.2.3. PARA LA DOCTRINA NACIONAL:

Según Sánchez (2020), “se trata de un proceso especial que se ubica dentro de los mecanismos de simplificación del proceso que modernamente se introducen en los códigos procesales” (p. 445).

Del mismo modo, Reyna (2014), sostiene, “constituye una suerte de transacción judicial previa al juzgamiento” (p. 139).

Por su parte, Rodríguez et al. (2012) afirman, “es un proceso especial por el que las partes (fiscal e imputado) acuerdan la pena a imponerse, la reparación civil correspondiente y las demás consecuencias accesorias de la condena” (p. 64).

De la misma manera, Neyra (2010), precisa:

Consiste en el acuerdo entre el procesado y la Fiscalía, respecto de los cargos, la pena, reparación civil, y demás consecuencias accesorias de ser el caso conforme al artículo 468° del NCPP, con admisión de culpabilidad de alguien o algunos cargos que se formulan, permitiéndole al encausado la obtención de la disminución punitiva. De esta manera, se pone fin al proceso. (p. 464)

De igual forma, Taboada (2009), señala:

Una institución consensual que permite la solución del conflicto jurídico penal, en forma alternativa, y hasta preferente, por su rapidez y eficacia a la conclusión tradicional en un juicio público y contradictorio. Es una suerte de transacción previa a la etapa final de juzgamiento que evidentemente contiene concesiones recíprocas, el imputado negocia la admisión de culpabilidad y el fiscal negocia una reducción de la pena. (p. 33)

Finalmente, Brousset (2009), expresa:

Fórmula simplificada que permite la conclusión consensuada del proceso penal mediando el respeto del principio de legalidad, consenso conclusivo que es producto de una negociación entre el fiscal y la defensa, basada en recíprocas concesiones y se ve auspiciada por las consecuencias premiales que la ley le acuerda. (p. 84)

2.2.4. PARA LAS INSTITUCIONES DE LA REFORMA:

Respecto de la terminación o definición consensuada y anticipada del proceso penal, la CEI – CPP (2018) en el “Protocolo de actuación interinstitucional específico para la aplicación de la terminación anticipada del proceso”, indica:

Proceso especial y mecanismo de solución del conflicto penal que permite la culminación del proceso de manera anticipada, privilegiando el principio de consenso, y permitiendo – a su vez – que el imputado sea beneficiado con una reducción de pena, siempre y cuando reconozca y acepte su responsabilidad penal respecto de los hechos investigados. (p.172).

De igual manera, la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal de 2004 (2014) en el “Protocolo de mecanismos de negociación y solución del conflicto penal”, plantea:

Proceso especial y mecanismo de solución del conflicto penal que permite la culminación del proceso de manera anticipada, privilegiando el principio de consenso, y permitiendo – a su vez – que el imputado sea beneficiado con una reducción de pena, siempre y cuando reconozca y acepte su responsabilidad penal respecto a los hechos investigados. (p. 37)

Por su parte, la Escuela del MP - FN (2013) en la “Guía de actuación fiscal en el nuevo Código Procesal Penal”, establece:

Es un proceso que evita la investigación y el juzgamiento, al existir elementos de responsabilidad y un acuerdo entre el imputado y el fiscal, donde el imputado acepta los

cargos, pudiendo obtener reducción de la pena en una sexta parte. (p. 68)

Del mismo modo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2013) en la Guía Práctica: “Uso de salidas alternativas y mecanismos de simplificación procesal penal bajo el nuevo Código Procesal Penal”, precisa:

Es un proceso especial y un mecanismo de simplificación procesal que sustenta en el principio de consenso y en virtud del cual se beneficia al procesado que acepta los cargos con una reducción de pena en la medida que permite la culminación anticipada de la causa penal. (p. 68)

Por último, el Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia (2012) en la “Guía de actuación del juez en el nuevo Código Procesal Penal”, señala: “es una negociación jurídico procesal para llegar a un acuerdo sobre la pena y la reparación civil” (p. 59).

2.3. FUNDAMENTO POLITICO CRIMINAL

Al respecto, Rodríguez et al. (2012) afirman:

Se han adoptado criterios de simplificación para evitar perder tiempo en actos que bien pueden obviarse; por ejemplo, disponiendo el juicio inmediato cuando es innecesario

enfrascarse en una mayor investigación, o terminando el proceso con una sentencia anticipada, de manera que se racionalice el empleo de los escasos recursos presupuestales y personales para dedicarlos a causas realmente graves o alarmantes que requieren recorrer todas las etapas del proceso común. (p. 58)

Ahora, la implementación de la terminación consensual y anticipada del enjuiciamiento penal, a decir de Neyra (2010), “se da por razones de política criminal, ante la necesidad de conseguir una justicia más rápida y eficaz” (p. 468).

Es decir, como afirma San Martín (2015):

Este proceso pretende una mayor eficiencia de la justicia penal y atiende a razones de política criminal, de descongestión procesal, es, pues, una respuesta que apunta a la simplificación procesal y busca responder a la dilación excesiva de los procesos, con lo que se beneficia no solo al imputado sino también a la víctima. (p. 824)

Por ello, Brousset (2009) sostiene, que la terminación anticipada como fórmula simplificatoria del proceso penal, “cobra autonomía definitiva, sustentada en el principio de consenso y en la necesidad político criminal de eficacia a través de una resolución judicial rápida al conflicto penal” (pp. 83-84)

En ese entendido, la CEI - CPP (2018) a través el Protocolo de actuación interinstitucional específico para la aplicación de la

terminación anticipada del proceso penal, establece que, “el fundamento de la terminación anticipada se cimienta en la necesidad de lograr una justicia rápida y eficaz, siendo una expresión destacada de la justicia penal negociada” (p. 172).

2.4. OPORTUNIDAD PROCESAL: MOMENTO Y LÍMITE TEMPORAL DE SU CELEBRACIÓN.

2.4.1. PREVISIÓN NORMATIVA:

La figura procesal de la terminación [definición] anticipada, que se destaca por basarse en el consenso entre las partes, se encuentra regulado:

TERMINACIÓN ANTICIPADA PREVISIÓN NORMATIVA	
LIBRO V PROCESOS ESPECIALES	
SECCIÓN V	ARTÍCULOS 468 AL 471
REGLAS DEL PROCESO COMÚN APLICACIÓN SUPLETORIA	

2.4.2. MOMENTO DE CELEBRACIÓN:

El inciso 1 del art. 468 del CPP de 2004, prescribe:

1. A iniciativa del Fiscal o del imputado, el Juez de la Investigación Preparatoria dispondrá, **una vez expedida la Disposición Fiscal del artículo 336° y hasta antes de formularse acusación fiscal**, pero por una sola vez, la celebración de una

audiencia de terminación anticipada, de carácter privada. Su celebración no impide la continuación del proceso. Se formará, al respecto, cuaderno aparte.

Así, de acuerdo con una interpretación y aplicación literal de dicho texto normativo, y sin considerar sus fundamentos político criminales, la terminación consensual y anticipada, procedería únicamente durante el periodo de la investigación preparatoria formalizada.



2.4.3. LIMITE TEMPORAL EN LA PRÁCTICA JUDICIAL: DE LA POSIBILIDAD DE APLICARLO INCLUSIVE EN LA ETAPA INTERMEDIA.

La terminación anticipada y consensuada del proceso penal, es quizás, el mecanismo de simplificación procesal que mayor discusión ha generado en la práctica judicial, desde que, en algunos distritos judiciales del país, en los que se encontraba vigente el Código Procesal Penal de 2004, se

aplicaron en etapa intermedia del proceso penal, procesos simplificadores de terminación anticipada.

Precisamente, la terminación anticipada y su incorporación en la etapa intermedia del proceso penal común u ordinario, dada la situación problemática anotada, se convertiría en uno de los temas discutidos en el V Pleno jurisdiccional supremo de las salas penales, quienes luego del debate y habiéndose determinado un criterio consensuado, el de 13 de noviembre de 2009, emitieron el **acuerdo Plenario 5-2009/CJ-116 [en adelante AP 5-2009]**: Proceso de terminación anticipada y aspectos esenciales.

Así, el **AP 5-2019**, ratificando lo previsto por el **numeral 1 del artículo 468 del CPP de 2004**, estableció, como doctrina con carácter vinculante que, el proceso de terminación anticipada se solicita o requiere después de expedida la disposición de formalización de la investigación preparatoria y hasta antes de formularse por escrito la acusación fiscal.

En ese contexto, como anota Reyna (2014), “las partes pueden solicitar la terminación anticipada en tanto no se haya formulado acusación fiscal”, sin embargo, “a nadie le cabe duda, que este mecanismo de simplificación procesal sería por demás provechoso, aún en la etapa intermedia” (Ibarra, 2012, p.62).

Por esta razón, en algunos distritos judiciales, apartándose de los criterios vinculantes establecido por **AP 5-2019/CJ-116 del 13 de noviembre de 2009**, se acordó lo siguiente:

1. La CSJ de Ancash (2018) en el Pleno jurisdiccional en materia penal - distrital, por mayoría acordaron que:

Sí es procedente la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia desde una interpretación amplia, pues el fin de la terminación es evitar etapas y audiencias innecesarias; además debe tenerse en cuenta la carga procesal que afronta las fiscalía y juzgados en todo el país

2. La CSJ de Ayacucho (2017) en el Acuerdo 05-2017-ETDINCPP/CSJAY desarrollado en el 2017, plantearon que:

Si es posible llevar a cabo el acuerdo de terminación anticipada en la etapa intermedia, solo sí, se encuentran presentes todas las partes legitimadas tales como: Fiscal, acusado con su abogado defensor, agraviado de estar constituido en actor civil y, cuando no haya posición alguna de las partes.

Pero, además, lejos de los criterios que sustentaron el **AP - 2009**, algunos casos penales se resolvieron anticipadamente

en la etapa intermedia o previa a juicio oral, es decir, luego del requerimiento acusatorio. Así tenemos, por ejemplo:

1. **En el expediente judicial 3356-2011-43:** Sentencia condenatoria anticipada (3JIP de Trujillo, 3 de mayo de 2012):

No existe ningún obstáculo legal para que los sujetos procesales puedan incoar el proceso especial de terminación anticipada, por el periodo comprendido entre la expedición de la disposición de formalización de investigación preparatoria hasta la formulación (escrita y oral) del requerimiento de acusación en la audiencia preliminar, como lo prevé el artículo 468.1° del CPP. (f.j. 1.7)

2. **En el expediente judicial 70-2016-15:** Sentencia anticipada condenatoria (3JIP de Trujillo, 29 de enero de 2018)

La terminación anticipada, por su especial naturaleza compositiva, evita un juzgamiento innecesario, brinda mayor beneficio premial al imputado que una sentencia de conformidad, no afecta al derecho de defensa del imputado, se expide en un marco de mayor calidad probatoria de la imputación penal pues el requerimiento de

acusación tiene mayor respaldo que el dictamen de formalización de investigación preparatoria, se encuentra acorde con los principios de celeridad, economía y elasticidad procesal y se encuentra considerada como uno de los mecanismos por los cuales se despliega adecuadamente la política de aceleración y simplificación del procedimiento penal para mejorar la administración de justicia. (f.j. quinto)

Por ello, consideramos que, los argumentos esbozados por los magistrados en lo penal de la máxima instancia judicial, no hicieron más que evidenciar que, el riguroso sentido de interpretación que impide la procedencia de la terminación anticipada en la etapa previa al juicio oral, se aparta de la orientación político criminal por la que fue instaurado como mecanismo alternativo simplificador del proceso penal, y sobre todo, complicaba el cambio de mentalidad de aquellos operadores jurídicos que, aun cuando destacaban la notable incidencia de la terminación o definición anticipada en el sistema de enjuiciamiento penal, por razones de autoridad de la máxima instancia judicial, se resisten a aplicarse en la etapa previa al juicio oral.

En ese sentido, los jueces supremos en materia penal, dejaron escapar la oportunidad, para zanjar esta situación problemática en el ejercicio de la función jurisdiccional de los distritos judiciales del país, y, reconocer que la aplicación de la terminación anticipada en la etapa previa al juicio oral, no

se define a partir de una interpretación literal del texto de la norma - que lo único que hace es denotar una inconsistencia normativa con el sistema procesal reformado -, sino que su implementación como reacción a la crisis del sistema penal de justicia, se fundamenta en su finalidad político criminal. Solo bajo ese criterio interpretativo, este aspecto pudo haber sido calificado como esencial.

CAPÍTULO II

TERMINACIÓN ANTICIPADA EN ETAPA INTERMEDIA O PREVIA AL JUICIO ORAL: A PROPÓSITO DEL ACUERDO PLENARIO 5-2009

1. ACUERDOS PLENARIOS: ALCANCES CONCEPTUALES Y SU INVOCACIÓN EN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL.

1.1. CONSIDERACIONES SOBRE SU NATURALEZA JURÍDICA.

La Corte Suprema de Justicia de la República (2019) en la Casación 46-2018/Nacional del 17 de abril de 2019, respecto de los acuerdos plenarios refiere que:

Son líneas de interpretación jurisdiccional asumidas por los jueces supremos, luego de una discusión colectiva. La legitimidad de los acuerdos se sustenta en que son adoptados por el máximo nivel de la Magistratura Ordinaria, la interpretación asumida es producto de la deliberación del Pleno, y se considera que la orientación de la decisión adoptada constituye el correcto sentido explicativo de la ley. (f.j. octavo)

De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional (2019) en la Casación 35-2018/Sala Penal Nacional del 21 de agosto de 2019, sobre los acuerdos plenarios sostiene que:

[...] se trata de criterios interpretativos consensuados y conformes a la norma legal. No se trata de la creación de una

norma legal, sino de interpretaciones cuyo carácter vinculante - relativo - recae en la parte prescriptiva del acuerdo - ratio decidendi o parte resolutive del acuerdo. (f.j. noveno).

De otro lado, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ, 2008) en la guía titulada “Guía metodológica de plenos jurisdiccionales”, estableció que, “los acuerdos plenarios suponen el concierto de voluntades de los señores magistrados sobre el sentido y aplicación de una o más normas materiales o adjetivas respecto a los temas sometidos a debate en el pleno jurisdiccional” (p. 13).

En esa línea, somos de la opinión de que los acuerdos plenarios son criterios de interpretación consensuados que establecen, *previa discusión de las distintas posiciones jurídicas planteadas*, lo que debería ser el correcto significado de determinadas disposiciones normativas, ya sean materiales o adjetivas.

1.2. DE CRITERIO ORIENTADOR A CRITERIO VINCULANTE

El artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), prescribe que: “Los integrantes de las salas especializadas, pueden reunirse en plenos jurisdiccionales nacionales, regionales o distritales a fin de concordar jurisprudencia de su especialidad, a instancia de los órganos de apoyo del Poder Judicial”.

Los acuerdos que se adapten en una reunión plenaria, “no poseen fuerza vinculante para la resolución de un caso en particular; sin embargo, orientan a los magistrados en el ejercicio de su función

jurisdiccional, lo cual conlleva a la predictibilidad de las resoluciones judiciales” (CEPJ, 2008, p. 13).

Sin embargo, en el acuerdo plenario 5-2009, se estableció que los fundamentos jurídicos 7 al 21 constituían doctrina legal, y por ello, han de ser invocados por los operadores de justicia de todas las instancias judiciales, sin perjuicio de la excepción que prevé el segundo párrafo del artículo 22 de la LOPJ, el que, a decir de los magistrados supremos, es aplicable extensivamente a los acuerdos plenarios dictados al amparo del artículo 116 del estatuto orgánico.

1.3. FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y LA DESVINCULACIÓN DEL ACUERDO PLENARIO 5-2009.

En orden a sus criterios interpretativos, los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho y de Ancash, apartándose de los criterios interpretativos establecidos por la máxima sede judicial en el AP 5-2009, acordaron, la aplicación de la terminación anticipada del proceso penal en la etapa intermedia, fundamentalmente, por las razones político criminales que le subyacen como mecanismo de simplificación procesal.

CSJ DE AYACUCHO	
ACUERDO 5-2017-ETDINCP/CSJAY	
Fecha	08 de diciembre de 2017
Tema	Terminación anticipada en fase intermedia
Acuerdo	Si procede en fase intermedia

CSJ DE ANCASH	
PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL EN MATERIA PENAL	
Fecha	19 de octubre de 2018
Tema	Terminación anticipada en fase intermedia.
Posición N.º 01	No es posible aplicar la terminación anticipada en fase intermedia del proceso penal.
Posición N.º 02	Si es posible aplicar la terminación anticipada en fase intermedia del proceso penal.
Acuerdo	Si procede aplicar la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso.

Por consiguiente, consideramos que, es en razón al principio de autoridad, del que como máximo órgano de decisión jurisdiccional está investido la Corte Suprema de Justicia, por el que los jueces supremos buscan uniformizar con una misma fuerza vinculante - so pretexto de la predictibilidad de las resoluciones judiciales - todas aquellas decisiones que emanen de su instancia, sean resultado del ejercicio de la función jurisdiccional o como consecuencia de las sesiones plenarias de carácter no jurisdiccionales, derivando esto último, en una desnaturalización de su potestad jurisdiccional para fijar o establecer principios o doctrinas jurisprudenciales.

2. TERMINACIÓN ANTICIPADA: A PROPÓSITO DE SU APLICACIÓN EN ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL.

La terminación consensuada y anticipada del enjuiciamiento penal, es quizás, al igual que la colaboración eficaz, uno de los mecanismos o salidas de simplificación procesal que ha generado mayor discusión en la práctica judicial desde que en algunos distritos judiciales del país en los que estaba vigente el CPP de 2004, los órganos jurisdiccionales decidieron promover su aplicación en la etapa previa al juicio oral, esto es, tras la formulación del requerimiento fiscal de acusación.

Precisamente, la posibilidad de aplicar la terminación consensuada y anticipada en la etapa previa al juicio oral, fue uno de los temas objeto de debate por el V pleno jurisdiccional supremo de las salas penales realizado el 13 de noviembre de 2009. De esta manera, en dicha sesión plenaria los magistrados supremos acordaron, desde su parecer, lo que debería ser el criterio de interpretación normativo más apropiado sobre diversos aspectos de dicha figura procesal, de modo que, emitieron por unanimidad el AP 5-2019 titulado: “Proceso de terminación anticipada y aspectos esenciales”.

Así, para la máxima instancia judicial, los principales fundamentos para limitar la aplicación de la terminación [definición] consensual y anticipada únicamente a la fase de la investigación preparatoria conforme con la norma procesal penal, y con ello, impedir su celebración en la etapa intermedia o previa al juicio oral, fueron los siguientes:

1. La aplicación de la terminación [definición] anticipada en la fase previa al juicio oral no solo desnaturaliza las normas que regulan

dicha figura procesal, sino que, además, se distorsiona su naturaleza jurídica.

2. Asimismo, la aplicación de la terminación [definición] anticipada en la fase previa al juicio oral tergiversa la orientación político criminal de simplificación procesal que sustentó su incorporación en el CPP de 2004.
3. De otro lado, a aplicación de la terminación anticipada en la etapa previa al juicio oral, vulnera derechos o garantías procesales de los demás sujetos procesales.

Sin embargo, los argumentos sostenidos por los jueces que integran las salas supremas penales, no hicieron más que evidenciar, que el sentido de interpretación normativo que limitaba la aplicación de la terminación [definición] anticipada hasta antes de formularse por escrito la acusación, se apartaba de la orientación político criminal por la que fue instaurada como vía alternativa simplificadora del proceso penal.

Además de ello, el carácter vinculante de sus fundamentos - complica el cambio de mentalidad jurídica propio de la reforma procesal de aquellos jueces de investigación preparatoria que - aun cuando reconocen la incidencia positiva de la terminación anticipada en el proceso penal - por el principio de jerarquía de los magistrados supremos, evitan generar un conflicto de posturas jurídicas, en el que sus criterios de interpretación normativa podrían llegar a ser más acertados que la opinión de los jueces supremos, sobre todo, cuando ellos mismos evidencian contradicciones doctrinarias, tal como sucede entre el AP 5-2009 y el AP 5-2008.

CONTRADICCIÓN DOCTRINARIA EN ACUERDOS PLENARIOS	
ACUERDO 5-2008	ACUERDO 5-2009
La terminación anticipada es un criterio de oportunidad	La terminación anticipada no es un criterio de oportunidad

En ese contexto, creemos que los jueces penales de la suprema corte, dejaron escapar una oportunidad para zanjar esta situación problemática en el ejercicio de la función jurisdiccional, y, reconocer que la aplicación de la terminación consensual y anticipada en la etapa previa al juicio oral, no se define a partir de una interpretación rigurosa y literal del enunciado normativo, que denota una inconsistencia normativa con el sistema de enjuiciamiento penal reformado, sino que su implementación obedece a una reacción a la crisis del sistema penal de justicia, se fundamenta en su finalidad político criminal. Solo bajo ese criterio, este aspecto pudo haber sido calificado en el acuerdo plenario como esencial.

2.1. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO PENAL COMÚN EN ETAPA INTERMEDIA: POSICIÓN DISCREPANTE SOBRE LA DESNATURALIZACIÓN DE SU REGULACIÓN NORMATIVA Y SU NATURALEZA JURÍDICA ASUMIDA POR EL AP 5-2009.

El AP 5-2009 sobre los aspectos esenciales del proceso especial de terminación anticipada, en su considerando diecinueve, sostiene que, *“la incorporación del proceso de terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso común no sólo desnaturaliza su regulación propia y naturaleza jurídica [...]”*

Ahora, cuando el acuerdo plenario alude a la desnaturalización de la regulación jurídica de la terminación anticipada – por el solo hecho de aplicarlo en la etapa intermedia -, entendemos que se refiere a la transgresión al principio de legalidad, por cuanto el inciso 1 del artículo 468 de la norma procesal penal establece que:

1. A iniciativa del fiscal o del imputado, el juez de la investigación preparatoria dispondrá, una vez expedida la disposición fiscal del artículo 336 y hasta antes de formularse acusación fiscal, pero por una sola vez, la celebración de una audiencia de terminación anticipada, de carácter privada. Su celebración no impide la continuación del proceso. Se formará, al respecto, cuaderno aparte.

Pero, si bien el texto literal de la norma es claro, creemos que, para su interpretación normativa, debe tomarse en cuenta, además de su ubicación sistemática en la ley procesal penal, el propósito que persigue su regulación en el citado cuerpo legal. Precisamente, es desde una interpretación sistemática y teleológica de la norma, que se justifica la procedencia de la terminación o definición consensual y anticipada como proceso (trámite) especial y mecanismo o salida de simplificación procesal, inclusive, dentro de otro proceso especial como el proceso inmediato, lo que, justamente, se advierte de los numerales 3 y 4 del artículo 447 del CPP.

De esta manera, en ese contexto normativo, es razonable sostener que la celebración de la terminación [definición] anticipada tiene por finalidad evitar la etapa de juicio oral (en el proceso penal común) o la fase de juicio inmediato (en el proceso especial).

INTERPRETACIÓN NORMATIVA SISTEMÁTICA Y TELEOLÓGICA DE LA TERMINACIÓN CONSENSUAL Y ANTICIPADA	
EN EL PROCESO PENAL COMÚN	EN EL PROCESO ESPECIAL INMEDIATO
Se solicita ante el juez de IP	Se insta ante el juez de IP
Se evita audiencia para juzgamiento	Se evita audiencia única de juicio inmediato

En ese sentido, con la incorporación de la terminación consensual y anticipada en fase intermedia del enjuiciamiento penal, es decir, tras formularse la acusación fiscal, no se desnaturalizan las normas que la regulan, puesto que, por el contrario, una interpretación literal del texto legal por demás inadecuada, denotaría una inconsistencia normativa con las orientaciones del nuevo sistema procesal penal reformado.

De otro lado, también señala el acuerdo plenario, que la naturaleza jurídica de la terminación [definición] anticipada, al tratarse de un mecanismo consensual, impide admitir a la etapa intermedia como sede de procedibilidad para su aplicación procesal, de modo que, el acuerdo entre el fiscal y el imputado sólo podrá realizarse hasta antes de requerirse acusación en su contra.

EL ACUERDO DE TERMINACIÓN O DEFINICIÓN ANTICIPADA	
EN SEDE FISCAL	EN SEDE JUDICIAL
La negociación se realiza en las reuniones preparatorias informales	La negociación se realiza durante la audiencia de TA

El acuerdo de terminación o definición anticipada, producto de una negociación entre las partes procesales involucradas - ya sea en sede fiscal o sede judicial - implica un consenso respecto de las circunstancias del delito, la sanción penal, la reparación civil y las consecuencias accesorias, así lo establece el numeral 5 del art. 468 del CPP.

El consenso procesal que sustenta la terminación anticipada, supone la afirmación de la existencia de suficientes elementos de convicción que acreditan la realidad del hecho delictuoso y, sobre todo, la intervención del imputado en su comisión, de tal manera que, es ese nivel de suficiencia probatoria, se realiza la aceptación de la responsabilidad penal del imputado, es decir, de los cargos imputados por el fiscal.

Ahora, una vez concluido el periodo de la investigación preparatoria, el fiscal cuenta con un plazo legal – depende de las características y la complejidad de la investigación penal – para formular el requerimiento acusatorio y, por ende, se exige un grado más intenso de sospecha si pretende llevar el caso o conflicto penal a juicio oral.

Así, la variación de sospecha reveladora – que se requiere para formalizar la investigación preparatoria – a sospecha suficiente – como presupuesto para formular acusación – se fundamenta en la existencia – para el fiscal – de medios probatorios que acrediten con suficiencia el hecho delictuoso y la vinculación del imputado en su comisión, de modo que, en la audiencia del control de acusación, le permita sostener con convicción la posibilidad de llevar a cabo el juzgamiento.

Sin embargo, aun en la etapa procesal intermedia, que supone para el fiscal contar con un estándar de sospecha suficiente, se sugiere la aplicación de mecanismos alternativos de definición o resolución de conflictos penales, esto con el único y principal propósito de evitar el traslado y avance innecesario de los casos penales a la fase de juicio oral.

En efecto, dada la excepcionalidad del juicio oral, el literal e) del artículo 350 del CPP, establece que, luego de notificada la acusación, los sujetos procesales, en el plazo de diez días, podrán instar la aplicación de un principio de oportunidad o de un acuerdo reparatorio; mecanismos procesales que, al igual que la terminación y la conclusión anticipada, constituyen salidas o vías alternativas al desarrollo secuencial y lineal del proceso penal.

Debe tomarse en cuenta que, para la procedencia de un criterio de oportunidad, de acuerdo con lo establecido por el artículo 6 del Reglamento del principio de oportunidad y acuerdo reparatorio, “se deberá contar con los elementos de convicción que acrediten la existencia del delito y la vinculación del imputado con este”, pero,

además de ello, en nuestra opinión, el fiscal o el agraviado deberá acreditar el daño económico ocasionado por las consecuencias del acto delictivo, y de esta forma, determinar el monto de la reparación civil.

Así, para la procedencia de un mecanismo alternativo de solución del caso o conflicto penal en una audiencia preliminar de control de acusación, se requiere de suficientes elementos de convicción que sustenten, por un lado, la pretensión punitiva, y por el otro, la pretensión económica derivada del hecho punible cometido.

Dicho esto, y en orden a la exigencia probatoria, igual propósito se conseguiría con la aplicación o procedencia de la terminación o definición anticipada en la etapa previa al juicio oral sin que tal posición signifique tener que considerar a dicha figura procesal, como un criterio de oportunidad.

En ese contexto, la audiencia preliminar de control de acusación, está diseñada no solo para verificar la existencia o no de defectos formales y sustanciales en la relación jurídica procesal, sino que, además, al permitir instar la aplicación de un criterio de oportunidad, esta tiene por finalidad depurar y simplificar los casos penales y, de esta forma, decidir si procede o no el traslado de los mismos a la etapa excepcional de juzgamiento. Al menos ello se infiere del literal e) del artículo 350 del CPP.

Por ese motivo, aún con una acusación fiscal por controlar, y formulada en razón a un nivel de sospecha suficiente, no existiría obstáculo legal que impida la incoación de la terminación anticipada

del proceso penal – como mecanismo de simplificación procesal – en la etapa intermedia o previa al juicio oral, puesto que su aplicación – siempre que exista suficiencia probatoria. procuraría una represión penal rápida y, sobre todo, atender de forma pronta y anticipada el daño ocasionado por el acto criminal.

Inclusive, en un escenario con evidencia delictiva como el proceso inmediato, se otorga la facultad de solicitar o requerir una salida alternativa ante el juez de investigación preparatoria. Entonces, no es la suficiencia de los elementos de convicción lo que limita la incorporación de la terminación [definición] consensual anticipada del enjuiciamiento penal en la etapa previa al juicio oral, sino una mentalidad jurídica inquisitiva que se manifiesta indudablemente en la limitación de su oportunidad procesal y, cuya discordancia con las orientaciones del actual sistema procesal penal, se convierte en la práctica judicial, en una inconsistencia normativa.

En ese sentido, consideramos que, la incoación de la terminación anticipada en la etapa procesal intermedia, supondría suspender la audiencia de control de acusación por un breve término, en tanto dure la audiencia de control del acuerdo de terminación anticipada. De esta manera, si el juez de investigación preparatoria desaprueba el acuerdo de terminación anticipada, deberá continuarse el proceso penal y, por tanto, deviene en obligatorio el debate respecto del control formal y sustancial de la acusación, tendientes a preparar el juicio oral.

2.2. LA TERMINACIÓN ANTICIPADA Y SU ORIENTACIÓN POLÍTICO CRIMINAL EN EL PROCESO PENAL: OPINIÓN DISCREPANTE RESPECTO DE SU TERGIRVERSACIÓN COMO MECANISMO DE SIMPLIFICACIÓN PROCESAL APLICABLE EN LA AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN ASUMIDA POR EL AP 5-2009.

2.2.1. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO PENAL COMÚN: MECANISMO SIMPLIFICADOR DEL PROCESO Y ECONÓMICO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

La implementación en el CPP de 2004 de la definición o terminación anticipada del enjuiciamiento penal - al igual que otras salidas alternativas de resolución de conflictos penales -, surge, principalmente, como una reacción del Estado a la problemática de congestión procesal en el sistema de justicia penal derivada - hasta la actualidad - de la excesiva y ascendiente carga de procesos penales judicializados.

La incorporación de mecanismos procesales alternativos al proceso penal común, posibilitan una definición rápida y anticipada del caso penal, puesto que su celebración, basada en el consenso, permite simplificar o eliminar las etapas del proceso penal, o si se quiere, *abreviar la duración del desarrollo del proceso penal común garantizando de igual manera los derechos procesales*, de modo que, de acuerdo con las orientaciones del sistema reformado de justicia penal, *no todo caso con relevancia penal debe llegar a juicio oral.*

Pero, además, creemos que, al aplicarse la terminación anticipada se reduce el gasto de ejecución estimado por proceso penal, por lo que creemos que su objetivo no es meramente procesal. Así, en nuestra opinión, además de ser un mecanismo procesal de simplificación, la terminación consensuada y anticipada constituiría, sin alguna duda, un mecanismo económico de resolución de conflictos penales.

2.2.2. FASES DE LA ETAPA INTERMEDIA: FASE ESCRITA Y FASE ORAL [AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL DE ACUSACIÓN]

En el reestructurado esquema procesal, la entrega formal de la acusación, del sobreseimiento o de ambas decisiones fiscales, dirigidas al juzgado de la investigación preparatoria en nuestra opinión, es lo que dará inicio a la segunda etapa del proceso penal, es decir, su presentación por mesa de partes será presupuesto esencial para el comienzo de dicha etapa procesal.

Si el fiscal decidiese formular acusación, la presentación formal del requerimiento y los cuestionamientos que por escrito y dentro del plazo establecido hicieran el acusado y el actor civil del requerimiento fiscal, justificarán la programación y realización de una audiencia orientada al control de la acusación fiscal, de ahí que la etapa previa al

juicio oral – conforme el AP 6-2009 del 13. 11. 2019 – este estructurada en dos importantes fases: escrita y oral.

En cuanto a la primera fase de la etapa intermedia esta supone la exposición escrita de los requisitos formales y sustanciales que una acusación fiscal debe contener obligatoriamente, pero, además, de aquellas cuestiones sobre la forma y el fondo que, dentro del plazo establecido, hubieran sido planteadas por el acusado y, de ser el caso, por el actor civil, como consecuencia de la notificación de la acusación escrita.

Posteriormente, el juez de la investigación formalizada, en atención a la acusación fiscal y los escritos presentados por los demás sujetos intervinientes en el proceso, celebrará en un plazo menor a veinte (20) días, una audiencia preliminar destinada al control formal y sustancial de la acusación escrita.

Así, durante la fase oral de la etapa procesal intermedia, el juez de la investigación formalizada se pronunciará sobre la viabilidad de la acusación, luego exposición, debate y análisis oral de los fundamentos que motivaron el requerimiento acusatorio y de los que cuestionan dicha decisión fiscal.

En el control formal, el juez verificará la concurrencia obligatoria de las condiciones legales señaladas en el inciso 1 del art. 349 del CPP, en cuyo caso, de haberse detectado

defectos formales, tendrá que suspender la audiencia de control para una próxima sesión, la que deberá programarse dentro de un plazo no mayor de ocho (08) días, lo que significa que, hasta el reinicio de la audiencia preliminar - al menos como lo establece la norma procesal penal – habrá transcurrido un plazo de veintiocho (28) días.

Luego, en el control sustancial, siempre que no haya observaciones o una vez subsanado los mismos, el juez procederá al control sustancial de la acusación escrita, en el que analizará los aspectos sustanciales que fundan y niegan la viabilidad de la acusación fiscal, y con ello, resolver si el caso penal debería o no avanzar a la fase de juicio oral. El auto de enjuiciamiento del acusado deberá emitirse dentro de los cuarenta (40) días de presentado el requerimiento escrito.

2.2.3. DEL NIVEL DE SOSPECHA SUFICIENTE A LA CERTEZA JUDICIAL.

La convicción fiscal plasmada en la acusación escrita no determinará, de manera automática, la decisión judicial acerca del enjuiciamiento del acusado, puesto esta se adoptará luego de hacer escuchado a las partes procesales en la audiencia preliminar del control de acusación.

Así, en esa lógica, aun cuando se haya presentado una acusación escrita, si existiese un consenso entre el fiscal y el acusado, de manera que se produzca la afirmación de

suficientes elementos de convicción y la aceptación de los cargos imputados por el fiscal por la existencia de suficiencia probatoria, entonces el juez de garantías, tendrá certeza al momento de definir anticipadamente el conflicto penal.

Dicho esto, la formulación escrita de la acusación, no es ni debería ser un obstáculo para celebrar la audiencia de terminación anticipada en la etapa intermedia, puesto que, como hemos señalado, se habrá sentenciado al acusado de manera rápida y efectiva, y con ello, evitando que un caso penal haya llegado – innecesariamente – a la etapa de juicio oral.

2.2.4. ETAPA INTERMEDIA: SUPUESTO DE VIABILIDAD.

Efectivamente, la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal común - siempre que instarlo en este escenario procesal no afecte derechos o garantías de los demás sujetos procesales – evitaría llevar el caso penal hasta juicio oral, por lo que consideramos que, será posible solicitar o requerir su celebración en los siguientes supuestos:

1. Cuando el requerimiento fiscal o solicitud del imputado ha sido presentado luego de formularse el requerimiento acusatorio, pero hasta antes de notificar el mismo para su absolución a los sujetos procesales.

2. Cuando la solicitud del imputado ha sido presentada hasta antes de notificar a los sujetos procesales la citación a la audiencia preliminar de control de acusación.
3. Cuando el requerimiento fiscal o solicitud del imputado ha sido presentado luego de notificarse la citación a la audiencia preliminar de control de acusación.

Inclusive, en atención al carácter principal y excepcional del juzgamiento, el juez de la investigación formalizada, a partir del análisis sustancial de la acusación, está facultado para decidir de oficio y previo al juicio oral el sobreseimiento del caso penal, es decir, podrá decretar en la etapa procesal intermedia que no existirían posibilidades razonables para enjuiciar al acusado, ello por configurarse algunos de los supuestos de procedencia del sobreseimiento exigidos en el numeral 2 del art. 344 del CPP.

En ese contexto, en el proceso penal común, el juez de la etapa intermedia tiene por función preparar debidamente el juicio oral, es decir, verificará la inexistencia de algún vacío o defecto procesal que pudiera afectar la realización del juzgamiento y admitirá los medios probatorios que ofrezcan los sujetos involucrados en el escenario procesal.

En efecto, podemos sostener que, la reducción de la duración del proceso penal común, no es - ni debería ser - el único objetivo de la incorporación de la terminación anticipada como salida alternativa, pues conforme hemos señalado, al instarse y aplicarse en la etapa o fase procesal

intermedia, *se busca conseguir que el conflicto penal se defina anticipadamente, es decir, previo al juicio oral*, de esta manera, la convicción del juez de investigación formalizada, a diferencia de la certeza del juez de juzgamiento, se sustenta en el consenso entre el fiscal de la investigación y el acusado que acepta los cargos imputados en atención al material probatorio recabado.

De igual forma, lo que se pretende es reparar al agraviado de manera rápida e integral, garantizándole la posibilidad de que, en su calidad de actor civil constituido, pueda participar activamente *en las negociaciones de su pretensión económica* y, así, legitimar el acuerdo de terminación anticipada, así como su intervención en la audiencia de control del acuerdo provisional, en cuyo caso no se haya llegado a un acuerdo sobre la reparación civil con el imputado.

2.3. EL AGRAVIADO Y SU PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

2.3.1. EL AGRAVIADO Y EL PERJUDICADO EN EL PROCESO PENAL.

Sobre los conceptos de agraviado y perjudicado en el proceso penal común, consideramos que, el agraviado es el sujeto pasivo que ha sufrido las consecuencias directas del evento delictivo. Por su parte, el perjudicado es el sujeto

pasivo que, como titular de un derecho lesionado, tiene un interés directo en la reparación o compensación económica por el daño ocasionado.

VÍCTIMA EN EL ESCENARIO PROCESAL	
AGRAVIADO	PERJUDICADO
Consecuencias directas del hecho punible	Interés directo por el daño civil sufrido

Así pues, cuando la calidad de agraviado y perjudicado recae en una misma persona, esto no generará mayor discusión. Sin embargo, cuando recae en sujetos distintos, deberá tomarse en cuenta lo señalado por el art. 98 del CPP, en el que se precisa que, *“la acción reparatoria en el proceso penal sólo podrá ser ejercitada por quien resulte perjudicado por el delito”*.

De esta manera, corresponderá al perjudicado por el delito, dentro del periodo de investigación formalizada, requerir la constitución formal en actor civil en sede penal, momento desde el cual, se le reconocerá la facultad para intervenir en el proceso penal.

2.3.2. LA REPARACIÓN CIVIL COMO DERECHO DE ACCIÓN CIVIL DENTRO DEL PROCESO PENAL.

La afectación concreta del derecho lesionado por el evento punible fundamenta el interés del agraviado de convertirse

en actor civil. De esta manera, la decisión del juez de constituirlo en actor civil, legitima su intervención activa en la sede penal y, por ende, facultado para deducir dentro del mismo, una pretensión económica por la comisión del suceso delictivo imputado al agente o autor.

En ese contexto, la reparación civil, al igual que la sanción penal, es una de las consecuencias jurídicas del hecho punible, de modo que, además de la pretensión punitiva estatal, una vez legitimado el agraviado, se discutirá en sede penal, su pretensión de índole civil.

PROCESO PENAL COMÚN U ORDINARIO	
ESTADO	PERJUDICADO
Pretensión punitiva	Pretensión económica
Sanción penal	Reparación civil

Respecto de la reparación civil, es indudable que es un derecho del agraviado solicitarlo y sustentarlo ante el órgano jurisdiccional penal. Así, al tratarse del ejercicio del derecho de acción civil dentro de un proceso penal, la suprema instancia judicial (2013) en la sentencia de casación 353-2011, Arequipa, del 4 de junio de 2013, señaló: “El agraviado del delito se encuentra en condiciones de ser un protagonista del proceso penal, encontrándose facultado por el CPP para participar activamente en el desarrollo del proceso” (f.j. 4.5).

En ese sentido, es necesario que el agraviado, esta vez legitimado como actor civil, actúe con los derechos y las garantías mínimas que le permitan en sede penal, defender y asegurar válidamente la satisfacción de su pretensión económica.

Precisamente, en resguardo de los intereses del actor civil, una de las reglas para la celebración de la audiencia de terminación [definición] anticipada, *que importa también el acuerdo sobre la reparación civil*, es que el requerimiento o la solicitud de incoación de dicho mecanismo alternativo, sea puesto en conocimiento de los sujetos procesales, *entre las que se encuentra incluida la parte agraviada*, quien precisamente, tendrá la posibilidad de acreditar y defender los intereses económicos que persigue, dentro de los cinco (5) días siguientes.

Ahora bien, respecto de la presencia del agraviado en la audiencia de terminación anticipada, se ha interpretado erróneamente que, al ser su asistencia facultativa, de acuerdo con lo señalado por el numeral 4 del art. 468 del CPP, era innecesario notificarle el requerimiento del fiscal o la solicitud del imputado solicitando la realización de dicho acto procesal, más aún si no se había constituido en actor civil.

Sin embargo, sobre el particular, la máxima instancia judicial (2017) en la sentencia de casación 656-2015,

Tumbes, del 16 de agosto de 2017, ha sostenido lo siguiente:

[...] no es correcto interpretar el artículo 468.4 de la norma procesal penal, como erróneamente lo han considerado las instancias ordinarias, que la ausencia del actor civil, cuya asistencia es facultativa, justifica la falta de notificación a la precitada audiencia, pues son actos procesales distintos. *En esta línea, la notificación a la instalación de la audiencia de terminación anticipada es obligatoria para todas las partes procesales, aun cuando el agraviado no se haya constituido en actor civil*, al margen de si su presencia es facultativa, es decir, si no condiciona la actuación e instalación de la audiencia, en virtud a que en la misma o previa a ella, dada en la etapa investigativa en la que se encuentra, esto es, en la oportunidad procesal pertinente, podría solicitar constituirse en actor civil y ejercer las facultades patrimoniales que le otorga la norma procesal y, de esta manera, no provocar que se quede en grave estado de indefensión, como ocurrió en el presente caso. (f.j. vigésimo sexto)

Por consiguiente, la falta de notificación al agraviado de la citación a la audiencia judicial de terminación [definición] anticipada, limita, evidentemente, esa posibilidad que tendría el agraviado de reclamar y defender los intereses que pudieran surgir con ocasión de la ejecución de un suceso delictivo.

2.3.3. EL DERECHO DE DEFENSA DE LA ACCIÓN CIVIL EN LA AUDIENCIA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA CELEBRADA EN LA ETAPA PROCESAL INTERMEDIA

2.3.3.1. LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL ACTOR CIVIL EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL.

El numeral 1 del artículo 351 del CPP, sobre la instalación de la audiencia de control de la acusación, precisa que, solo es obligatoria la presencia tanto del fiscal como del abogado defensor del acusado, aun cuando se hubiere notificado el requerimiento acusatorio también a la parte agraviada.

Al respecto, resulta conveniente aclarar que, en el proceso penal peruano, a la pretensión punitiva se ha acumulado la pretensión de naturaleza civil. De ahí que, para efectos de dilucidar en un proceso penal una pretensión civil, como consecuencia del daño ocasionado por la comisión de un hecho delictivo, el CPP requiere que la parte agraviada se constituya o convierta, previamente, en actor civil.

De modo que, si el agraviado - *durante el plazo de la etapa investigativa formalizada* - no se

constituyó en actor civil, entonces no tendrá legitimidad para reclamar y defender los intereses reparatorios que persigue con ocasión de un ilícito penal cometido en su agravio, en cuyo caso, será el fiscal quien ejercerá la acción civil y su probanza, la que, como se ha mencionado, debió corresponderle como titular de un derecho lesionado al actor civil.

Ahora bien, en cuanto a la oportunidad procesal del actor civil para plantear su pretensión resarcitoria, consideramos que, de acuerdo con lo previsto por el literal g del numeral 1 del artículo 350 del CPP, será en su escrito de absolución del requerimiento acusatorio, la ocasión en la que el actor civil deberá ofrecer los medios de prueba que acrediten el daño ocasionado con el hecho delictivo y, por consiguiente, justifiquen el importe o monto definitivo de la reparación civil pretendida.

En ese contexto, corresponde al actor civil, resguardar en sede penal los intereses económicos que demanda como parte agraviada, tal como se hiciera dentro de un proceso civil; por lo que, en atención a lo anotado, es importante, aunque la norma procesal no lo exija, que el actor civil, asista y participe, en su calidad de demandante, en la audiencia preliminar de control de acusación.

2.3.3.2. EL DERECHO DE DEFENSA DEL ACTOR CIVIL EN EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.

El AP 5-2009, afirma que, la incorporación de la terminación anticipada en la etapa previa al juicio oral, afectaría sustancialmente los derechos e intereses legítimos del actor civil, por cuanto su presencia en la audiencia de control de acusación es facultativa. En otros términos, la inasistencia del actor civil no condiciona la instalación la referida audiencia judicial.

Sin embargo, no le falta razón a la máxima instancia judicial, cuando sostiene que, solicitar la celebración de la terminación consensuada y anticipada, inmediatamente después de instalada la referida audiencia preliminar so pretexto de la presencia facultativa del actor civil, implicaría claramente la imposibilidad de que la parte agraviada debata de manera directa la pretensión resarcitoria que demanda satisfacer.

En efecto, el carácter simplificador del proceso de terminación anticipada por consenso entre las partes, que es lo que justamente fundamenta su incorporación como mecanismo alternativo al desarrollo clásico y secuencial del proceso penal común, no debería reducir los intereses legítimos

de la parte agraviada, mucho menos, afectar los derechos procesales que le asisten en sede penal. Y es que el proceso penal garantiza la actuación del imputado como de la parte agraviada.

Así, en ese contexto garantista que ofrece el actual proceso penal común reformado, el actor civil bien podría participar activamente durante la audiencia de terminación anticipada, y con ello, debatir en sede penal su pretensión de índole civil sin que se vulneren sus derechos procesales e intereses legítimos.

Precisamente, consideramos que tres serían los supuestos en los que procedería la terminación consensuada anticipada del proceso penal:

1. Cuando el requerimiento fiscal o solicitud del imputado para la celebración de la terminación anticipada del proceso ha sido presentado luego de formularse el requerimiento acusatorio, pero hasta antes de notificar el mismo para su absolución a los sujetos procesales, *en cuyo caso* se pondrá en conocimiento del actor civil por un plazo de cinco días. En este supuesto, una vez vencido el plazo legal, el JIP citará a audiencia de terminación anticipada.

2. Cuando la solicitud del imputado ha sido presentada hasta antes de notificar a los sujetos procesales la citación a la audiencia preliminar de control de acusación. En estos supuestos, la solicitud del imputado se pondrá en conocimiento del actor civil por un plazo de cinco días. Una vez vencido el plazo legal, el JIP programará una audiencia de terminación anticipada.
3. Cuando el requerimiento fiscal o solicitud del imputado ha sido presentado luego de notificarse la citación a la audiencia preliminar de control de acusación, en cuyo caso se pondrá en conocimiento del actor civil por un plazo de cinco días. En estos supuestos, una vez vencido el plazo legal, el JIP citará en un mismo día, primero a audiencia de terminación anticipada, y seguidamente a audiencia de control de acusación.

Por consiguiente, la fase intermedia, como estadio procesal previo y preparatorio del enjuiciamiento, en la medida que no se afecten los derechos y garantías del actor civil, como lo hemos propuesto en los tres supuestos señalados, no solo facilita la terminación rápida y anticipada del proceso penal y, de esa manera, evita la realización de juicios orales innecesarios, sino que, además, garantiza los derechos procesales del actor civil (agraviado) en sede penal.

CAPÍTULO III

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

La terminación anticipada, es un mecanismo de simplificación procesal que, en atención al análisis crítico que hemos realizado a los criterios esbozados por la máxima instancia jurisdiccional, es posible aplicar en la etapa procesal intermedia puesto que, no desnaturaliza el proceso penal, ni vulnera los derechos procesales del actor civil en sede penal.

Para demostrar los beneficios que genera la celebración y la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia, creímos conveniente efectuar una entrevista y encuesta a los operadores jurídicos, y en orden a los datos obtenidos que realizar un análisis descriptivo de los mismos.

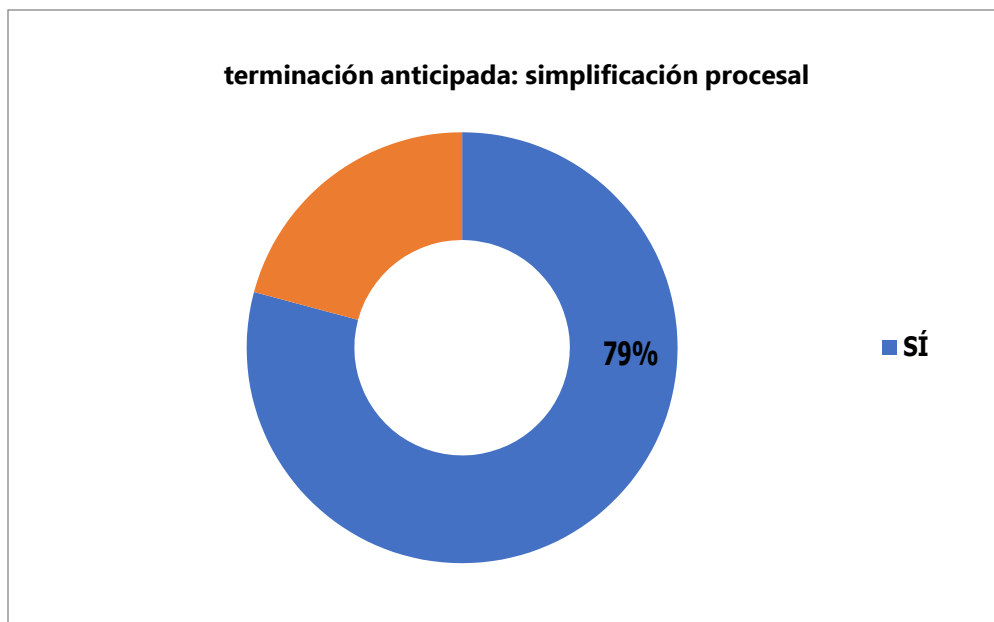
1. REGISTRO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE ENCUESTADOS.

La encuesta se le efectuó a veinticuatro (24) personas:

- Cinco (5) jueces investigación formalizada de la CSJ de Lambayeque, dos (2) de ellos especializados en delitos de corrupción de funcionarios y en criminalidad organizada respectivamente.
- Nueve (9) fiscales, entre adjuntos y provinciales, distribuidos en tres (3) fiscales de fiscalías de delitos comunes, tres (3) fiscales de la fiscalía de corrupción de funcionarios y tres (3) fiscales de la fiscalía contra la criminalidad organizada.
- Diez (10) abogados defensores, cinco (5) de defensa pública estatal y cinco (5) de defensa privada o de libre elección.

2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA.

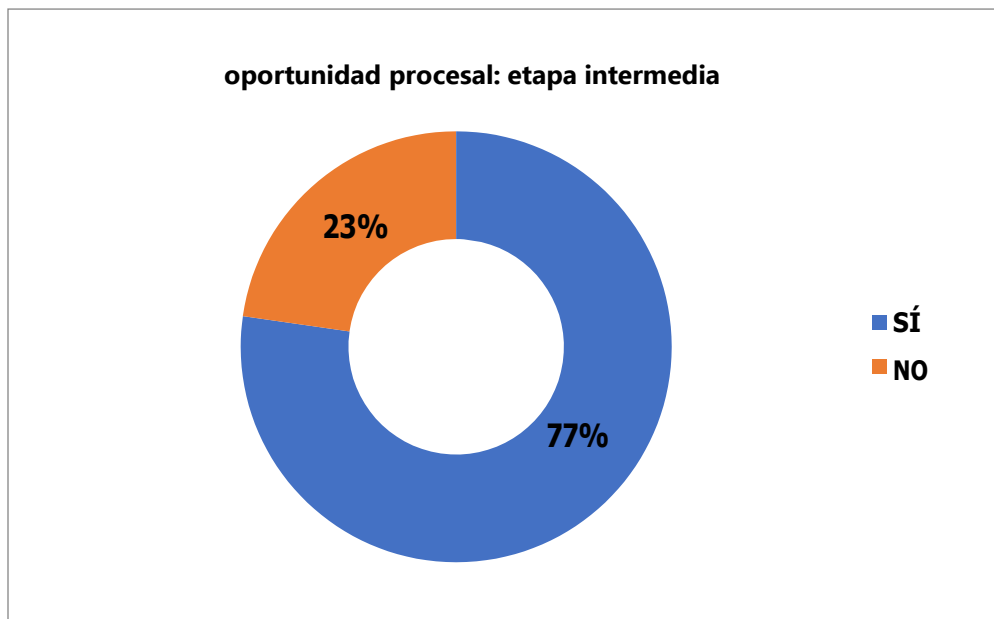
1. ¿La incorporación de la aplicación de la terminación anticipada del proceso penal obedece al cumplimiento de una política de simplificación procesal propio de un sistema procesal penal reformado?



Análisis: Del total de encuestados (población), se muestra que el 100 % de ellos, considera que la incorporación de la terminación anticipada del proceso penal en el CPP de 2004, obedece a las políticas reduccionistas propias de un sistema penal de justicia reformado y con ello, a la visión del proceso penal desde un enfoque de celeridad y economía procesal.

2. **¿Considera usted que la terminación anticipada constituye un mecanismo procesal que puede aplicarse inclusive en la etapa previa al juicio oral?**

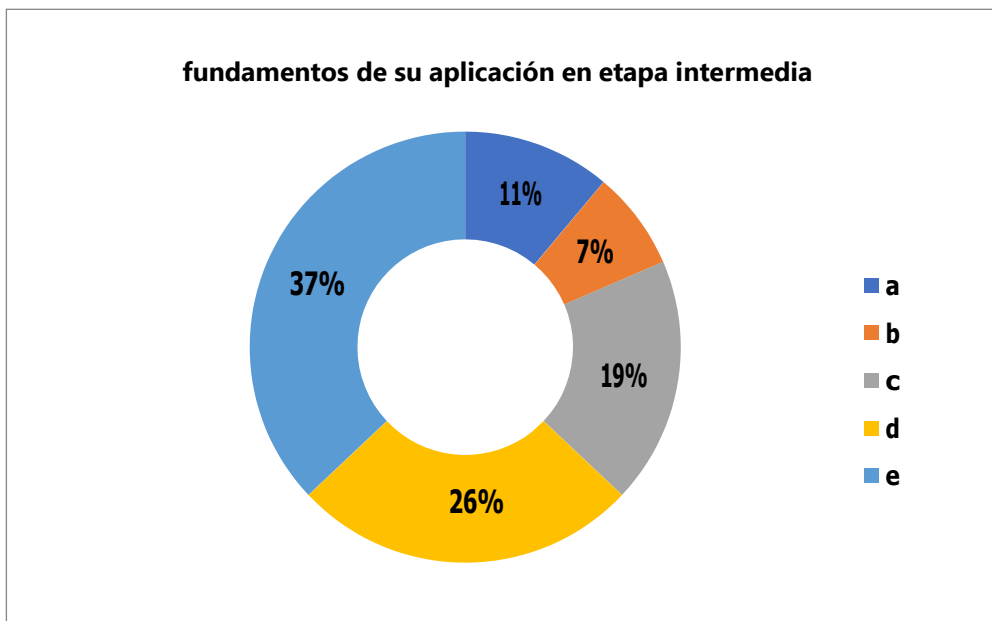
- a. Sí, es un mecanismo procesal que puede aplicarse en sede intermedia del proceso penal común.
- b. No, es un mecanismo procesal cuya celebración solo procede a la etapa de investigación formalizada.



Análisis: Del total de encuestados (población), se muestra que el 77 % de ellos, considera que la terminación anticipada del proceso penal, sí podría aplicarse en su etapa intermedia o previa al juicio oral, en tanto que el 23 % de encuestados, estima que no es posible su aplicación en una etapa procesal distinta a la establecida por el CPP.

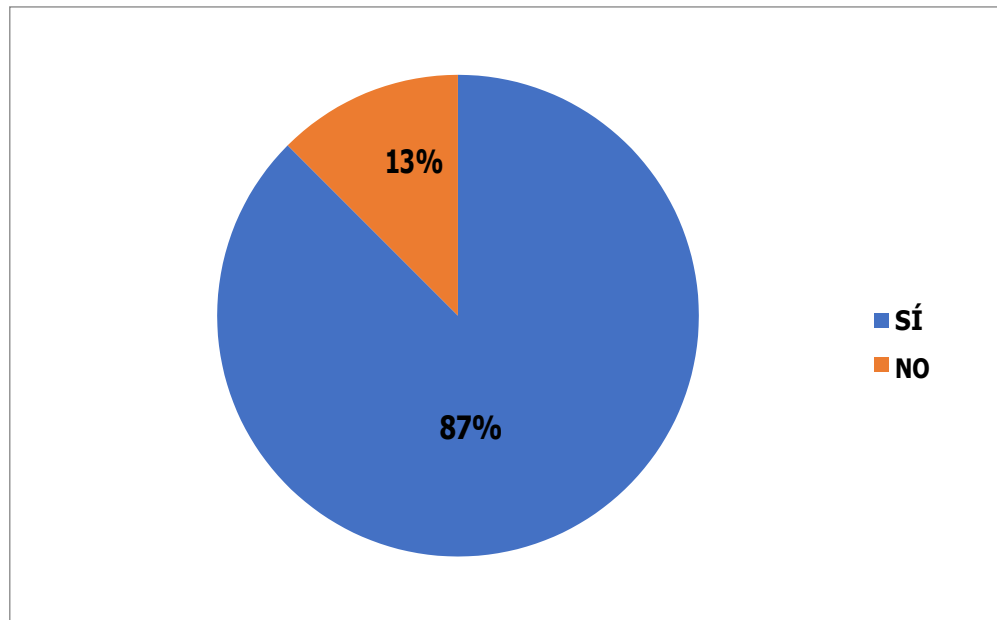
3. **¿Cuál considera usted que es o debería ser el fundamento político criminal para aplicar la terminación anticipada en la etapa previa al juicio oral?**

- a. Ahorro de tiempo y dinero para el sistema penal de justicia.
- b. Pronta y oportuna atención a la pretensión civil de la víctima.
- c. Rápida solución del conflicto de relevancia penal.
- d. Su incorporación tergiversa la terminación anticipada.
- e. Los fundamentos a, b y c.



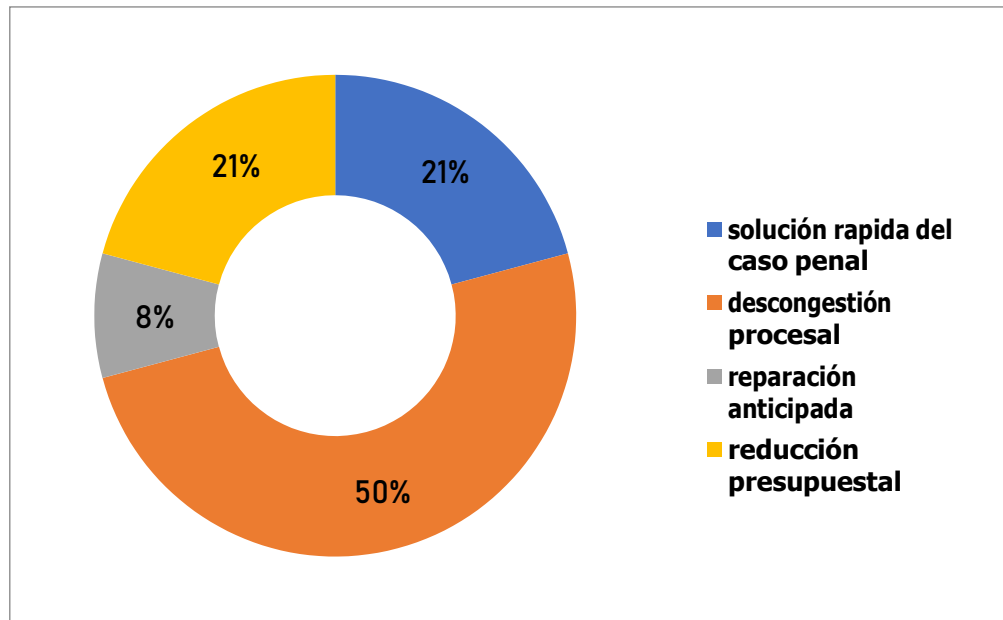
Análisis: Del total de encuestados (población), se muestra que el 74 % de ellos, considera que la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal se fundamenta en los beneficios generados en la provisión del servicio de administración de justicia y en la pronta y oportuna reparación de la víctima, mientras que el 26 % estima que su aplicación en una etapa procesal distinta a la establecida por el CPP, tergiversa la terminación anticipada.

4. Desde una perspectiva integral de la reforma: ¿La justicia penal negociada en nuestro ordenamiento jurídico exige un cambio de cultura jurídica en los operadores jurisdiccionales?



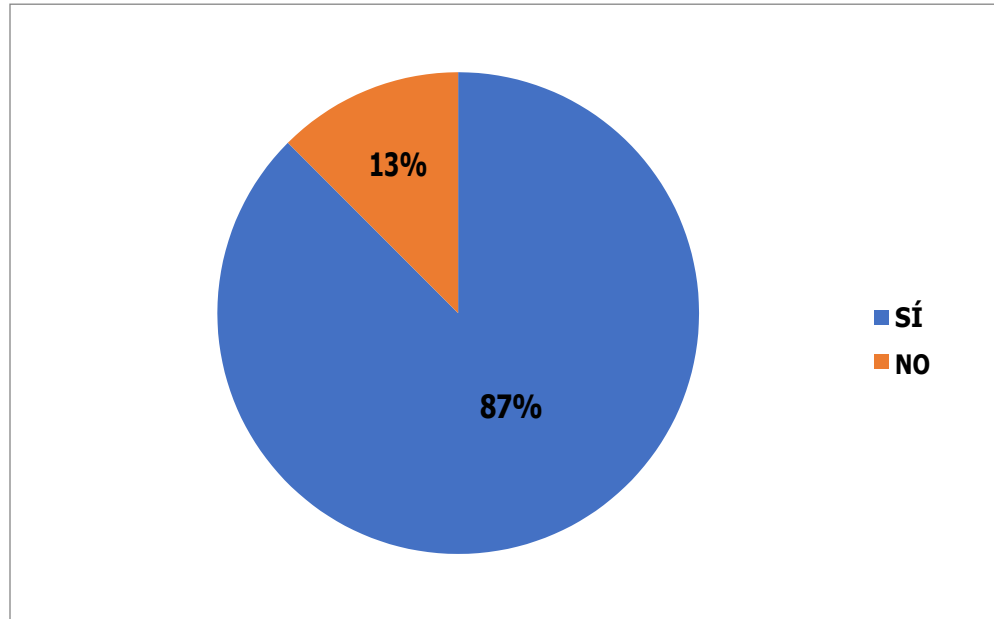
Análisis: Del total de encuestados, se muestra que el 87 % de ellos, considera que la justicia penal negociada en nuestro sistema de justicia penal, requiere un cambio de cultura o mentalidad jurídica de quienes la promueven y controlan su aplicación, mientras que el 13 % de encuestados, estima que la justicia penal negociada es un escenario que no exige cambios de cultura jurídica o mentalidad de reforma.

5. **Precise los beneficios que propone la incorporación de la terminación anticipada en la etapa previa al juicio oral**



Análisis: Del total de encuestados (población), se muestra que el 21 % de ellos, considera que la aplicación de la terminación anticipada es un proceso que ofrece una solución rápida del proceso penal, el 50 % estima que instar la terminación anticipada favorecería al descongestionamiento la carga procesal penal. Por su parte, el 21 % sostiene que la celebración de la terminación anticipada del proceso penal incide directamente en la oportuna reparación de la víctima, mientras que el 8 % de encuestados, estima que su aplicación en una etapa procesal distinta a la establecida por el CPP, reduciría el presupuesto estimado por cada proceso penal.

6. Desde el estándar probatorio durante el proceso penal común: ¿La suficiencia probatoria que se exige para la emisión del requerimiento fiscal acusatorio debería limitar la posibilidad de celebración de la terminación anticipada en la etapa previa al juicio oral?



Análisis: Del total de encuestados, se muestra que el 87 % de ellos, considera que la suficiencia probatoria que fundamenta la decisión fiscal de formular acusación no es impedimento para aplicar la terminación anticipada en la etapa previa al juicio oral, mientras que el 13 % de encuestados, es de la opinión, de que es imposible aplicar la terminación anticipada si ya se ha iniciado la etapa intermedia del proceso.

**PROPUESTA LEGISLATIVA QUE POSTULA LA IMPLEMENTACIÓN DE
LA TERMINACIÓN CONSENSUAL Y ANTICIPADA EN LA ETAPA
PROCESAL INTERMEDIA O PREVIA AL JUICIO ORAL**

PROYECTO DE LEY N. ° 1392-2021

**Ley que modifica el numeral 1 del
artículo 468 del Código Procesal Penal.**

PRESENTADA POR:

Frank Marcos Bernal Zevallos identificado con DNI 72918036 que suscribe, en ejercicio del derecho de iniciativa legislativa que le confiere el inciso 17 del artículo 2 y los artículos 37 y 107 de la Constitución Política del Estado y conforme lo establecen los artículos 74, 75 y el inciso 3 del artículo 76 del Reglamento del Congreso de la República, presenta el siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Congreso de la Republica ha dado la ley siguiente:

Artículo 1.- Modificaciones al Código Procesal Penal

Modifícase el numeral 1 del artículo 468 del Código Procesal Penal, bajo los siguientes términos:

Artículo 468.- Normas de aplicación

Los procesos podrán terminar anticipadamente, observando las siguientes reglas:

1. A iniciativa del fiscal o del imputado, el juez de la investigación preparatoria, en un cuaderno de tramitación aparte, dispondrá por una sola vez, la celebración de una audiencia de terminación anticipada, de carácter privado, en los siguientes supuestos:
 - a. Cuando el requerimiento fiscal o solicitud del imputado para la celebración de la terminación anticipada del proceso ha sido presentado luego de formularse el requerimiento acusatorio, pero hasta antes de notificar el mismo para su absolución a los sujetos procesales, *en* cuyo caso se pondrá en conocimiento del actor civil por un plazo de cinco días. En este supuesto, una vez vencido el plazo legal previsto en el numeral 3 del artículo 468, el JIP citará a audiencia de terminación anticipada.
 - b. Cuando la solicitud del imputado para la celebración de la terminación anticipada del proceso ha sido presentada hasta antes de notificar a los sujetos procesales la citación a la audiencia preliminar de control de acusación. En estos supuestos, la solicitud del imputado se pondrá en conocimiento del actor civil por un plazo de cinco días. Una vez vencido el plazo legal, previsto en el numeral 3 del artículo 468, el JIP programará la audiencia de terminación anticipada.
 - c. Cuando el requerimiento fiscal o solicitud del imputado para la celebración de la terminación anticipada del proceso ha sido presentado luego de notificarse la citación a la audiencia preliminar de control de acusación, en cuyo caso se pondrá en conocimiento del actor civil por un plazo de cinco días. En estos supuestos, una vez vencido el plazo legal, previsto en el numeral 3 del artículo 468,

el JIP citará en un mismo día, primero a la audiencia de terminación anticipada, y seguidamente a la audiencia de control de acusación.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Artículo 1 .- Derogación de normas opuestas a la ley

Quedan derogadas y sin efecto las normas legales y administrativas que se opongan o limiten la aplicación a la presente ley.

Artículo 2 .- Vigencia de la Ley

La presente ley entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario “El Peruano”.

Lima, octubre de 2021.

CONCLUSIONES

1. Se ha **establecido** que, una política de simplificación procesal compatible con la reforma del sistema penal de justicia, supone la implementación de esquemas, formulas o mecanismos procesales alternativos, como la terminación anticipada, que posibiliten una solución anticipada y eficaz del conflicto penal y pretendan una mejora en el sistema de administración de justicia penal.
2. Se ha **determinado** que, la finalidad político criminal del proceso simplificador de terminación anticipada no se limita únicamente al beneficio premial de reducción de pena del imputado, menos aún que su aplicación en la etapa previa al juicio oral se restrinja por la formulación escrita de la acusación o la iniciación de la audiencia de control de acusación, toda vez que este acto procesal de preparación del juicio, conllevaría a que, al ser el enjuiciamiento una etapa excepcional, prevalezcan los principios de consenso y aceleramiento procesal, y cuyo proceder implicaría no solo que el proceso penal no se desnaturalice, sino que además, no generaría inconvenientes a los demás sujetos procesales.
3. Se ha **demostrado** que, con la aplicación de la terminación anticipada en la etapa previa al juicio oral, es un mecanismo alternativo de respuesta a las deficiencias del sistema de justicia penal, en el que no solo las partes intervinientes en la negociación penal se benefician al resolverse con celeridad y eficacia el proceso penal acortándose los tiempos procesales, sino que el sistema penal de justicia resultaría también favorecido, debido a que ello acarrearía que se descongestione el sistema y, de esta manera, El Estado reduzca los costos que genera el desarrollo del proceso penal.

RECOMENDACIONES

1. Con el presente trabajo de investigación sugerimos que, los órganos jurisdiccionales promuevan la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia en el entendido de que este proceso de simplificación constituye una manifestación de la política de simplificación procesal diseñada por la reforma de la justicia penal peruana, con la finalidad de lograr una solución anticipada y eficaz del conflicto penal y una mejora en el sistema penal de justicia.
2. Si lo que pretendemos es evitar la etapa de juzgamiento, principal y excepcional, con el presente trabajo de investigación, entonces proponemos que, para la procedencia de la terminación anticipada en la etapa intermedia, los órganos jurisdiccionales no consideren como restricción de su celebración, la iniciación de la audiencia preliminar de control de acusación, puesto que la aplicación literal de una norma con rasgos inquisitivos, como la que regula la oportunidad para la incoación de la terminación anticipada, genera incoherencia en la práctica del proceso penal reformado.
3. Finalmente, recomendamos que, se aborde la gestión procesal actual bajo las nuevas orientaciones de reforma del sistema penal de justicia, con políticas de eficiencia y celeridad (partes negociadoras) y enfoque económico (Estado), de tal manera que, la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal constituya un mecanismo procesal eficaz y necesaria antes las deficiencias y crisis por las que atraviesa en la actualidad el sistema de justicia penal.

BIBLIOGRAFÍA

ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA (2013). Guía de actuación del juez en el NCPP. Lima, Perú: PMSJ

BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Alberto. (2010). *Procedimientos especiales. Lo nuevo del Código Procesal Penal de 2004 sobre los procedimientos especiales*. Lima, Perú: Gaceta Jurídica.

BURGOS MARIÑOS, Víctor. (2011). *El proceso de terminación anticipada en la etapa intermedia para mejorar la celeridad y descarga procesal*. (Tesis doctoral). Universidad Nacional Federico Villareal, Lima.

BURGOS MARIÑOS, Víctor Alberto. (2010). Apuntes para la interpretación constitucional del Código Procesal Penal. En: Revista Oficial del Poder Judicial. Revista de Investigación de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, vol. 6, números 6 y 7, pp. 97-128.

BROUSSET SALAS, Ricardo Alberto. (2009). “Legitimación de las fórmulas consensuadas simplificadoras del procesamiento Penal”. En: Revista Oficial del Poder Judicial. Revista de Investigación de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, volumen 5, número 5, Lima.

CABALLERO GARCÍA, Juana Mercedes. (2019). *El proceso de terminación anticipada en la etapa intermedia para mejorar la celeridad y descarga procesal*. (Tesis doctoral). Universidad Nacional Federico Villareal, Lima.

CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL. (2008). Guía metodológica de plenos jurisdiccionales. Lima, Perú: Centro de investigaciones judiciales.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. Sala Penal Nacional (17 de abril de 2019): Casación 46-2018/Nacional

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. Sala Penal Nacional (21 de agosto de 2019): Casación 35-2018/Nacional

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. II Pleno jurisdiccional extraordinario de las salas penales permanente y transitorias (01 de junio de 2016): Acuerdo Plenario N.º 2-2016/CJ.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. V Pleno jurisdiccional de las salas penales permanente y transitorias (13 de noviembre de 2009): Acuerdo Plenario N.º 5-2009/CJ.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Primera Sala Penal Transitoria (16 de agosto de 2017): Casación 655-2015, Tumbes.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH. Pleno jurisdiccional distrital en materia penal (19 de octubre de 2018).

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD. Tercer juzgado de investigación preparatoria de Trujillo (29 de enero de 2018). Expediente 70-2016-2015: Sentencia de terminación anticipada en etapa intermedia.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD. Tercer juzgado de investigación preparatoria de Trujillo (3 de mayo de 2012). Expediente 3356-2011-43: Sentencia de terminación anticipada en etapa intermedia.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA. Pleno jurisdiccional distrital en materia penal (16 de agosto de 2018).

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO. Acuerdo adoptado por los jueces de primera y segunda instancia (08 de setiembre de 2017). Acuerdo N.º 05-2017-ETDINCPP/CSJAY.

CUBAS VILLANUEVA, Víctor. (2016). *El nuevo proceso penal peruano. Teoría y práctica de su implementación*. Lima, Perú: Palestra Editores.

ESCUELA DEL MINISTERIO PÚBLICO. (2013). Guía de actuación del fiscal en el NCPP. Lima, Perú: PMSJ

FRISANCHO APARICIO, Manuel. (2019). Procesos penales especiales. Lima, Perú: Ediciones Legales.

GÁLVEZ BARRAZA, Bertha Gladys. (2018). *La efectividad de la terminación anticipada en el marco del Código Procesal Penal: análisis en el distrito judicial de Lima Norte en el periodo 2011 – 2015*. (Tesis de maestría). Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima.

LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. (2011). *Comentarios al Código Procesal Civil*. Lima, Perú: Gaceta Jurídica.

MARTÍNEZ MOSO, Fiorella Milagritos y MELON GUTIERREZ, Kenia Yeraldine. (2019). *Prohibición de la terminación anticipada en la etapa intermedia y su violación a la pena justa*. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. (2018). Protocolo de actuación interinstitucional específico para la aplicación de la terminación anticipada del proceso. Lima, Perú: MNJUS.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. (2014). Protocolo de mecanismos de negociación y solución de conflictos penales. Lima, Perú: MNJUS.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. (2016). III Informe estadístico nacional: “Reforma procesal penal peruana. Lima, Perú: MNJUS.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. (2013). Uso de salidas alternativas y mecanismos de simplificación procesal. Lima, Perú: MNJUS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. (2013). II Informe estadístico nacional: “Reforma procesal penal peruana. Lima, Perú: MNJUS.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. (2013). Uso de salidas alternativas y mecanismos de simplificación procesal. Lima, Perú: MNJUS

NEYRA FLORES, José Antonio. (2010). *Manual del nuevo proceso penal y litigación oral*. Lima, Perú: IDEMSA.

RAMOS DÁVILA, Liza. (2006). La fase intermedia. La implementación del nuevo Código Procesal Penal en Huaura: Algunos problemas y propuestas de solución. Actualidad jurídica, tomo 156, pp. 136-140.

REYES ALVARADO, Víctor Raúl. (2006). El proceso especial de terminación anticipada. Su aplicación en el distrito judicial de Huaura a partir de la vigencia del Código Procesal Penal de 2004. En: Revista de Actualidad Jurídica, tomo 156, pp. 141-145.

REYNA ALFARO, Luis Miguel. (2014). *La terminación anticipada en el Código Procesal Penal*. Lima, Perú: Gaceta Jurídica.

ROBLES QUEZADA, Viviana Judith. (2016). *Criterios para la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal peruano*. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo.

RODRIGUEZ HURTADO, Mario Pablo. (2008). “Los principios de la reforma y el Título Preliminar del nuevo Código Procesal Penal”. En: Revista institucional n.º 8 de la Academia de la Magistratura, primera edición, pp. 139-173, Lima.

SALAS BETETA, Christian. (2011). El proceso penal común. Lima, Perú: Gaceta penal y procesal penal.

SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. (2020). El proceso penal. Lima, Perú: Editorial Grijley.

SAN MARTIN CASTRO, César. (2000). *Derecho procesal penal*. Lima, Perú: Grijley.

SAN MARTIN CASTRO, César. (2015). *Derecho procesal penal. Lecciones*. Lima, Perú: INPECCP – CENALES.

TABOADA PILCO, Giammpol. (2013). Razones para inaplicar el acuerdo plenario N.º 5-2009/CJ-116 con el objeto de celebrar la terminación anticipada del proceso en la etapa intermedia. Gaceta Penal & Procesal Penal, tomo 51, p. 229-246.

TABOADA PILCO, Giammpol. (2009). El proceso especial de terminación anticipada en el nuevo Código Procesal Penal. Gaceta Penal & Procesal Penal, tomo 2, p. 31-62.

VILLAVICENCIO RIOS, Frezia Sissi. (2008). La terminación anticipada en la audiencia preliminar de control de acusación. Algunos problemas y propuestas de solución. Actualidad Jurídica, tomo 173, pp. 115-119.



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA
UNIDAD DE INVESTIGACION



ACTA DE SUSTENTACIÓN

A C T A DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL N° 11-2022-UI-FDCP

Sustentación para optar el Título de ABOGADO de don: **Frank Marcos Bernal Zevallos**.

Siendo las 11:00 a.m. del día lunes 21 de febrero del 2022 se reunieron vía Plataforma Virtual MEET de Google Suite de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo", los miembros del jurado evaluador de la tesis titulada: "**La terminación consensuada del proceso penal común y su incorporación en la etapa intermedia o previa al juicio oral**", designados por Decreto N° 050-2020-VIRTUAL-UI-FDCP-UNPRG de fecha 29 de setiembre del 2020, con la finalidad Evaluar y Calificar la sustentación de la tesis antes mencionada, por parte de los Señores Catedráticos:

PRESIDENTE : Abog. **CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS**.

SECRETARIO : Mag. **CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA**.

VOCAL : Abog. **CESAR VARGAS RODRIGUEZ**

La tesis fue asesorada por Mag. MARY ISABEL COLINA MORENO, nombrada por Decreto N°050-2020-VIRTUAL-UI-FDCP-UNPRG de fecha 29 de setiembre del 2020.

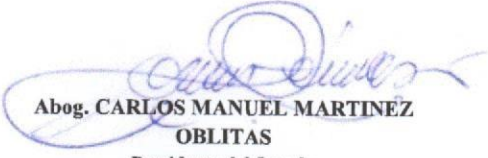
El acto de sustentación fue autorizado por Resolución N°026-2022-VIRTUAL-UI-FDCP-UNPRG de fecha 16 de febrero del 2022.

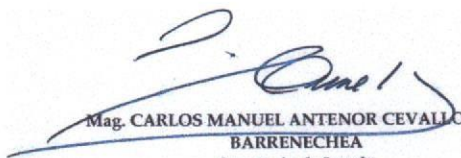
La tesis fue presentada y sustentada por el bachiller **Frank Marcos Bernal Zevallos** y tuvo una duración de 30 minutos. Después de la sustentación y absueltas las preguntas y observaciones de los miembros del jurado; se procedió a la calificación respectiva, obteniendo el siguiente resultado: **APROBADO con la nota de 17.62 (Diecisiete y 00/62) en la escala vigesimal, mención de BUENO.**

Por lo que queda APTO para obtener el Título Profesional de **ABOGADO**, de acuerdo con la Ley Universitaria 30220 y la normatividad vigente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Siendo las 12:03 p.m., del mismo día, se da por concluido el acto académico suscribiendo los miembros del jurado el Acta; quedando registrado el video en el link:
<https://drive.google.com/file/d/16hs6bndZqUgEn4Ra3r5Gzrbj8gw9QEOG/view?usp=sharing>

Lambayeque, lunes 21 de febrero del 2022


Abog. **CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS**
Presidente del Jurado

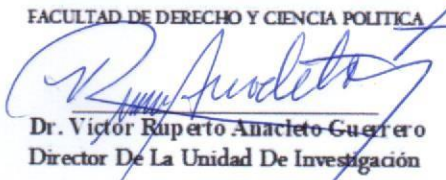

Mag. **CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA**
Secretario de Jurado


Abog. **CESAR VARGAS RODRIGUEZ**
Vocal del Jurado

Certificación: El Director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, certifica la veracidad del contenido del Acta de sustentación de tesis Virtual N° 11-2022-UI-FDCP correspondiente a Frank Marcos Bernal Zevallos, evento que se ha realizado de manera virtual el día lunes 21 de febrero del 2022 y aparece registrada en el archivo correspondiente.

Lambayeque, 23 de agosto del 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA


Dr. **Victor Ruperto Anacleto Guerrero**
Director De La Unidad De Investigación

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS

Yo, **Mg. MARY ISABEL COLINA MORENO**, asesora del tesista: **BERNAL ZEVALLOS, Frank Marcos**, luego de la revisión exhaustiva de su tesis titulada **“La terminación consensuada del proceso penal común y su incorporación en la etapa intermedia o previa al juicio oral”**, ha constado que la misma tiene un índice de similitud de **18 %** verificable en el reporte de similitud del programa Turnitin.

La suscrita analizó dicho reporte y concluyó que, cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender, la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Lambayeque, 2 de noviembre de 2021.



Mg. MARY ISABEL COLINA MORENO
D.N.I 40997649
ASESORA

La terminación consensuada del proceso penal común y su incorporación en la etapa intermedia o previa al juicio oral

INFORME DE ORIGINALIDAD

18%	18%	0%	7%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	repositorio.unprg.edu.pe	2%
	Fuente de Internet	
2	repositorio.unap.edu.pe	1%
	Fuente de Internet	
3	repositorio.unsa.edu.pe	1%
	Fuente de Internet	
4	lpderecho.pe	1%
	Fuente de Internet	
5	qdoc.tips	1%
	Fuente de Internet	
6	repositorio.udch.edu.pe	1%
	Fuente de Internet	
7	www.scribd.com	1%
	Fuente de Internet	
8	idoc.pub	1%
	Fuente de Internet	

9	Submitted to Pontificia Universidad Catolica del Peru Trabajo del estudiante	1%
10	hdl.handle.net Fuente de Internet	1%
11	static.legis.pe Fuente de Internet	1%
12	repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet	<1%
13	1library.co Fuente de Internet	<1%
14	documents.mx Fuente de Internet	<1%
15	revistas.pj.gob.pe Fuente de Internet	<1%
16	repositorio.unasam.edu.pe Fuente de Internet	<1%
17	repositorio.upagu.edu.pe Fuente de Internet	<1%
18	issuu.com Fuente de Internet	<1%
19	Submitted to Universidad Peruana Los Andes Trabajo del estudiante	<1%
20	vbook.pub	

<1 %

21

dspace.unitru.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

22

repositorio.uwiener.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

23

repositorio.unfv.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

24

www.mpfm.gob.pe

Fuente de Internet

<1 %

25

derecho.usmp.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

26

andrescusiarrredondo.files.wordpress.com

Fuente de Internet

<1 %

27

dokumen.site

Fuente de Internet

<1 %

28

doku.pub

Fuente de Internet

<1 %



Mg. Colina Moreno, Mary Isabel

29

repositorio.unheval.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

30

Submitted to Universidad Cesar Vallejo

Trabajo del estudiante


<1 %

31


cybertesis.unmsm.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

32	edoc.pub Fuente de Internet	<1 %
33	repositorio.uladech.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
34	repositorio.unp.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
35	iuris-res-nullius.blogspot.com Fuente de Internet	<1 %
36	pt.scribd.com Fuente de Internet	<1 %
37	es.scribd.com Fuente de Internet	<1 %
38	fr.scribd.com Fuente de Internet	<1 %
39	updocs.net Fuente de Internet	<1 %
40	luislingaderechoypolitica.blogspot.com Fuente de Internet	<1 %
	 Mg. Colina Moreno, Mary Isabel	
41	repositorio.uss.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
42	www.organojudicial.gob.pa Fuente de Internet	<1 %
43	repositorio.unh.edu.pe Fuente de Internet	<1 %

44	www.dspace.uce.edu.ec Fuente de Internet	<1%
45	www.minjus.gob.pe Fuente de Internet	<1%
46	Submitted to Universidad Catolica Los Angeles de Chimbote Trabajo del estudiante	<1%
47	docplayer.es Fuente de Internet	<1%
48	iuslatin.pe Fuente de Internet	<1%
49	www.incipp.org.pe Fuente de Internet	<1%
50	www.informatica-juridica.com Fuente de Internet	<1%
51	sistemas3.minjus.gob.pe Fuente de Internet	<1%



Mg. Colina Moreno, Mary Isabel

Excluir citas Activo
Excluir bibliografía Activo

Excluir coincidencias < 15 words




Recibo digital


Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por **Turnitin**. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: Frank Marcos Bernal Zevallos
Título del ejercicio: TESIS PRE GRADO 2021
Título de la entrega: La terminación consensuada del proceso penal común y su i...
Nombre del archivo: INFORME_FINAL_TURNITING_1.docx
Tamaño del archivo: 1.22M
Total páginas: 110
Total de palabras: 19,416
Total de caracteres: 107,653
Fecha de entrega: 02-nov.-2021 10:06a. m. (UTC-0500)
Identificador de la entrega... 1691056179



UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO"
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



TESIS

"La terminación consensuada del proceso penal común y su
incorporación en la etapa intermedia o previa al juicio oral"

ASESOR:


Mg. Colina Moreno, Mary Isabel

PRESENTADO POR:

Bach. Bernal Zevallos, Frank Marcos

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

Lambayeque, noviembre de 2021



Mg. Colina Moreno, Mary Isabel